

— EL GOBIERNO DE MILEI EN SHOCK —

EL AJUSTE NO, SE AGUANTA MÁS



La corrupción en discapacidad pone en entredicho el ajuste fiscal. Hace falta un salario de \$2.000.000 y acabar con la precarización laboral. En las calles y en las urnas vamos con la izquierda anticapitalista de Manuela Castañeira y el Nuevo MAS.

MANUELA CASTAÑEIRA |

“Hay un antes y un después de Lomas. La sociedad dijo basta”



Manuela Castañeira
@ManuelaC22



HAY UN ANTES Y UN DESPUÉS DE LOMAS.
LA SOCIEDAD DIJO BASTA.

El gobierno de Milei atraviesa una profunda crisis política, económica y social que demuestra el fracaso de su plan de ajuste fiscal y la pérdida de legitimidad, especialmente por afanarse la plata de discapacidad, que hizo estallar la bronca por parte de importantes sectores de la sociedad.
A este gobierno hay que castigarlo en las calles y en las urnas con la izquierda anticapitalista.

En @FMVinilo891

11:19 p. m. · 1 sep. 2025 1.1K Views

23

35

6K



Manuela Castañeira
@ManuelaC22



i@PatoBullrich, sos una provocadora profesional! No pedís allanar a los que se la afanaron toda, sino a los periodistas que en el ejercicio de su profesión han denunciado estos hechos aberrantes.

iDictadura nunca más! Envío mi solidaridad a @rialjorge y @maurofederico

3:59 p. m. · 1 sep. 2025 17.8K Views

18

188

488



Juan Cruz Ramat

Dirigente Nacional del Nuevo MAS

Todo gobierno y todo proyecto político necesitan un relato, una apelación al colectivo social que presente el interés de la propia clase como un interés transversal, general o al menos de una porción social suficiente que legitime sus acciones. Pero evidentemente, con esto no basta. Además otros tienen que acompañarlo, apoyarlo, sentirlo como propio y depositar expectativas en que esa representación de los problemas y las medidas para solucionarlos sean coherentes, incluso si esto ocurre de manera pasiva.

Días atrás el desborde de vecinos de Lomas de Zamora a una caravana oficialista con más policía y agentes de seguridad privados que simpatizantes reales de Milei, escenificó el quiebre del relato anarcocapitalista y su fracaso. Un relato que nunca logró hegemonía social (recordemos que Milei ganó las elecciones vía ballotage que genera una falsa mayoría social, y por 56% contra 44% de Massa) pero que fue acompañado de manera pasiva; es decir, sin capacidad de movilizar en las calles, por una mayoría social que venía desilusionada por los gobiernos peronistas y el breve gobierno de Macri. Un balance lapidario que puede resumirse en que el país no crece hace 15 años.

Frente a esto, y en el marco de un clima mundial reaccionario, en que la extrema derecha comenzó a ganar presencia, Milei irrumpió con un discurso “anticasta”, enemigo de lo público (el Estado en su relato) y de la “justicia social”, denunciándolos como un artilugio de los gobiernos anteriores para “robarle a la gente”, y agitador del anarco capitalismo, del ajuste fiscal, de los salarios en dólares, y de un discurso de odio oscurantista y reaccionario contra los derechos sociales y democráticos adquiridos, desde las condiciones de vida y salariales, hasta la protesta social y la diversidad de género. Su discurso había logrado estatus de relato y sus ataques legitimidad en un sector parcial de la sociedad.

La experiencia transcurrida luego de un año y nueve meses de gobierno, no sin sobresaltos (recordemos por poner sólo algunos ejemplos, la movilización histórica contra el ataque a las Universidades, la marcha en repudio a la igualdad de homosexualidad a pedofilia por Milei y, a otra escala, la movilización de la comunidad de discapacidades y jubilados) ha dado un salto. Sobre la base de una pésima y cada vez peor situación económica, desde la que las amplias mayorías trabajadoras miran en perspectiva el relato de Milei sobre las causas de los fracasos de gobierno anteriores y los beneficios de su motosierra, se fue ensanchando una brecha. En esa brecha cayó una bomba. El robo flagrante de los fondos para las discapacidades orquestada desde la cumbre del poder con Karina “El Jefe” Milei a la cabeza, tocó una fibra sensible. En los barrios se conoce como “rastreros” a los que le roban a los propios vecinos, a los laburantes. Pero una cosa es ser rastrero, y otra cosa es ser gobierno supuestamente “anticasta y anticorrupción”. Varios subsuelos abajo

del rastrerismo, está el antro del robo mileísta a los discapacitados y sus familias.

Este hecho actuó como un verdadero “principio de revelación”. El ajuste fiscal que implica el retiro del Estado del financiamiento a la salud, la educación, las jubilaciones, la asistencia a las discapacidades, la quita de los subsidios a las tarifas del transporte, luz o gas (que actúa como salario indirecto y sin los cuales el salario real se desploma aún más). En definitiva, el relato del “ajuste a lo público” y de las condiciones de vida para luego salir adelante, que un sector social asumió como compromiso, se reveló como una farsa. El relato de una banda de estafadores usando lo público para el enriquecimiento privado, la muerte del relato. FIN.

La escena de Lomas de Zamora dio cuenta de otro elemento de fondo: las relaciones de fuerzas se hicieron públicas una vez más en defensa de lo colectivo. Signos vitales de una sociedad con muchos lazos solidarios, con mucha empatía como para cruzarse de brazos ante las injusticias más graves, sustrato propicio e incommensurable para una sociedad sin explotadores ni explotados, ante un Estado capitalista que falla hace décadas. Exactamente lo contrario a una sociedad de suma de partes, de meros individuos, de la guerra de todos contra todos que añora el proyecto anarcocapitalista de Milei.

En esa escena antecedida por las escaramuzas en Junín, y seguidas por la de Corrientes y por un cierre de campaña provincial militarizado y sin gente en Moreno, quedó al desnudo el fin de la legitimidad del ajuste fiscal, del ajuste a lo público, un pilar económico y político del gobierno. La deslegitimación del ajuste fiscal en una mayoría social de trabajadores y sectores populares, que no se ha expresado aún como una irrupción de masas pero sí como un clima social de bronca explícita contra el gobierno y de vuelta a la vida, es el dato más grave y mortal para el gobierno de Milei.

Sin ajuste fiscal no hay Milei ni anarco capitalismo. Visto desde el interés de la burguesía: si Milei no puede cumplir, no ya con las contrarreformas pos octubre, un horizonte temporal completamente incierto, sino siquiera con este principio existencial de su proyecto que necesita de la anuencia de al menos un sector de la sociedad no minoritario: ¿para qué está? Ese “elefante blanco en la sala” ya no admite omisión. Es lo que apuntan las cientos de editoriales escritas en los últimos siete días por lo más granado de la burguesía política como Liotti, Jacquelin, Yebra, Donovan, entre otros, respecto de la necesidad de refundar al gobierno luego de un (difícil de imaginar) “triumfo sanador” para el oficialismo en las nacionales de octubre.

Al escándalo de corrupción, una mecánica clásica de los regímenes capitalistas que aceitan las relaciones entre el Estado y la burguesía (en este caso la droguería Suizo Argentina) con coimas y dádivas, se sumó el intento de censura previa y de allanamiento contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico que divulgaron audios sobre el caso. Otra medida que cayó pésimamente mal y generó el repudio desde la izquierda,

EDITORIAL I

¿Un gobierno con más pasado que futuro?

como el caso de Manuela Castañeira, hasta sectores del periodismo hasta antes de ayer simpatizantes. Lluve sobre mojado.

La propia idea de refundar el gobierno sobre otro programa o sobre la base de una coalición junto a otros partidos que asuman ministerios, por ejemplo, es admitir el fracaso de un grupo lumpen incapaz de generar alianzas, y orgulloso de esa impronta. Impronta que los llevó a romper diálogo, por nombrar el último de los casos, con Valdés recientemente electo a gobernador por la provincia de Corrientes con el 52% a quién extorsionaban para que se corriera y diera su lugar a un candidato de LLA que sacó el 8%. Otros burgueses económicos y políticos como el caso del Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, además de FATE, adelantan tácitamente un paso reglamentario (de no mediar un estallido social en regla, algo que no se puede descartar) en caso de que Milei se viera obligado por presión y circunstancias a la renuncia: la asunción de Villarruel a la presidencia. Una recorrida de la vice y amiga de Videla junto al magnate por la planta de neumáticos en San Fernando, en plena crisis de gobierno, visita que fue repudiada bajo la consigna de "persona no grata" por la agrupación Marrón y la Naranja, dieron un guiño en ese sentido. Hay recambio posible.

Varios sectores de la burguesía económica que también reclaman al gobierno por el ajuste fiscal. Desde luego, no por la parte que iba a salarios estatales, salud o educación, sino a aquella parte destinada a infraestructura, como son las rutas. El retiro del Estado en la mantención de vías férreas para transporte de carga y caminos impacta en los costos de producción y hacen una odisea el traslado de las mercancías, y echaron por tierra las inversiones extranjeras. Incluso la exención impositiva a las mega mineras impulsadas por el RIGI han tenido cero impacto en nuevas inversiones, ante la queja de las multinacionales que hay otros países con recursos mineros, sin impuestos significativos y con mejores rutas.

El punto común entre los grandes capitalistas y Milei en lo que refiere al ataque a los salarios y las condiciones laborales queda corto respecto de otros intereses generales, como el resguardo de la infraestructura general del país que en la medida que el Estado se retira, quedan vacantes y expuestas al deterioro. El rechazo en el Congreso a las medidas de Sturzenegger al frente el Ministerio de Desregulación que eliminaban Vialidad, además del INTI e INTA, fueron una cachetada para el gobierno, que había prometido llevar a la justicia las medidas si no pasaban el filtro del parlamento. La

pérdida de control del gobierno lo obligaron a retroceder de esa pretensión. Para qué insistir con eliminar ámbitos que también son de interés para la burguesía, y exponerse a un rechazo traspié en la justicia. Un retroceso acorde a la coyuntura crítica de un gobierno en crisis.

Sumemos por último el giro económico anti anarco capitalista de intervenir en la compra de dólares por debajo del techo de la banda (hoy en \$1470) para evitar una devaluación antes de octubre. Dólares que deberían ir a parar al pago de los USD 20 mil millones de vencimientos del 2026, y que le hace sudar la gota gorda al FMI que, aunque no quiere soltarle la mano al gobierno, mira con preocupación el destino del préstamo de abril. Con la tuya, FMI!

Un manotazo que se suma a los encajes de los bancos (porcentaje que deben inmovilizar sin poder prestarlos ni usarlos en la timba) a niveles históricos del 55%, similares a los que puso Menem a la salida de la hiperinflación, o las tasas exorbitantes de hasta 70% de interés anual que reciben los bancos por mantener los bonos del Estado, una política económica recesiva con la que los sectores financieros hacen enormes negocios, pero que liquida el crédito necesario para el funcionamiento del sector productivo.

Grave crisis de gobierno, contenido por las próximas elecciones y el régimen

Mientras que la idea de crisis terminal recorre las notas de periodistas como Liotti o Tenembaum, el régimen conserva su salud. El Congreso ha tenido un protagonismo como fiscalizador y limitador de las iniciativas de Milei como no había ocurrido desde el inicio del gobierno, cuando la Ley Bases bis pasó como si nada. La justicia ha dado lugar a una rápida investigación de los casos de corrupción, con los contrapuntos del fallo censurador del juez Maraniello, acusado de acoso y abuso sexual por varias de sus empleadas. Y las elecciones siguen marcando el timing del recambio de poder. Por esto, aún ante la grave crisis del gobierno, Milei sigue al frente del país. La continuidad del gobierno expresa al régimen actuando para contener, incluido aquí el peronismo, que vota en el parlamento pero se niega a movilizar, ni la CGT a convocar a medidas de paro y acción contra el gobierno aberrante, y a la espera de las elecciones. Sin la válvula de escape electoral, otra sería la situación.

Desde luego que esto no quiere decir que ante un fuerte traspié electoral del oficialismo incluso en las elecciones provinciales del inmediato 7 de septiembre, no pueda haber nuevos momentos de

zozobra. Ni qué hablar del caso que la derrota del gobierno se exprese en las urnas también en octubre. En ese caso, otros mecanismos deberán actuar ante el derrumbe del gobierno, sea vía coalición de gobierno, renuncia de Milei y recambio institucional, o incluso eventuales Asambleas Legislativas, como ocurrió durante el 2001 con una crisis mayor por la rebelión popular y el "Que se vayan todos", un mecanismo de "último recurso" (sin obviar las Asambleas Constituyentes).

Pero la lucha de clases no siempre respeta los tiempos institucionales. La crisis social en aumento, el malestar y el descontento podrían traducirse en nuevos desbordes e incluso irrupciones masivas en el próximo periodo. La contención del peronismo y la CGT podría resultar insuficiente. Otras compuertas podrían romperse.

En lo inmediato, el resultado de septiembre tendrá implicancias nacionales aun siendo legislativas provinciales. Una derrota cualitativa de LLA, aun cuando el peronismo, sin programa alternativo, hace todo para no ganar o para ganar por el menor margen posible, como lo muestra la inexistencia de su campaña, podría acelerar los tiempos políticos y meter aún mayor ruido en la economía. En todo caso, se descarta una enorme abstención que dejará a cualquiera de los ganadores con porcentajes bajos en relación a la totalidad de los habilitados para votar, un signo de debilidad para cualquiera de las alternativas triunfantes.

En este marco, el Nuevo MAS ha desarrollado una gran campaña con la ambición de representar las necesidades de las y los trabajadores, mediante el reclamo de 2 millones de salario mínimo. Contra viento y marea, y enfrentando campañas millonarias, de los partidos y coaliciones capitalistas como Fuerza Patria o LLA e incluso, aunque a otra escala, pero también millonaria, del FITU. Campaña con la que dimos puntapié inicial a las elecciones nacionales de octubre.

De regreso a octubre

Luego de 14 años de PASO proscriptivos, y en medio de una enorme crisis, volvemos a participar con candidaturas efectivas para las elecciones en la mitad de las provincias del país, y con una de las principales referentes de la izquierda, como el caso de Manuela Castañeira, que viene de realizar una gira por las ciudades de La Plata y Mar del Plata. Competiremos por ingresar de manera directa al Congreso en una pelea durísima contra los enormes aparatos del peronismo y LLA, pero también del FITU, que se ha

negado abiertamente a llevar adelante una coalición junto con nuestro partido. En este caso Manuela Castañeira, una compañera militante y trabajadora no docente que enfrentará a Nicolás Del Caño, una figura con acumulación de desgaste tras años de presencia parlamentaria y que, además, también viene de encabezar la lista de la Provincia de Buenos Aires, dándole la oportunidad a los simpatizantes de la izquierda a que elijan por quién se sienten mejor representados y de renovar a la izquierda. Se suman a la batalla por la renovación de la izquierda nuevas y jóvenes figuras como Julia Di Santi en Córdoba y Federico Winokur y de tradición, como Héctor "Chino" Heberling en CABA.

Las elecciones de octubre se presentan como una gran oportunidad para el Nuevo MAS, donde el debate salarial estará al tope de las problemáticas, y con la novedad del abandono del resto de la izquierda respecto de este reclamo, que es el más sentido por las y los trabajadores. Nuestra principal consigna será la necesidad de elevar los salarios a 2 millones de salario mínimo en todo el país, y vamos a desarrollar una enorme campaña para ingresar al Congreso y hacer un escándalo por este reclamo. Junto con esto, daremos a conocer un Manifiesto anticapitalista para demostrar la posibilidad de llevar los salarios a estos niveles como punto de partida, y de otras medidas estructurales para terminar con una década y media de estancamiento económico, en el marco de impulsar el control y dirección democrática de la economía por parte de las y los trabajadores, ante los sucesivos fracasos de los gobiernos capitalistas y anarco capitalistas.

Una campaña que buscará colocar a nuestro partido entre las voces que representen a los trabajadores y trabajadoras en el Congreso, a la vez que impulsará toda instancia de lucha que se presente en el periodo que tenemos por delante. La policrisis que se desarrolla en el país puede tener expresión tanto electoral como de nuevos eventos de conflictos en las calles por la movilización de sectores de la educación, de la salud, de jubilados o de sectores populares. Nuestra campaña anticapitalista que va de abajo hacia arriba tendrá un ojo puesto en cada evento de la lucha de clases que pueda ocurrir, para visibilizar y contribuir a su máximo desarrollo con nuestra participación activa. Combinada con una agitación sistemática para que las necesidades de las mayorías sociales sean escuchadas en el Parlamento.

Sumáte al lanzamiento de campaña de Manuela Castañeira el próximo 19 de septiembre en Puán, y construyamos juntos una salida anticapitalista para el país.■

El anuncio de la intervención del Tesoro para contener el dólar

Federico Dertaube y Miguel Paredes

Izquierda Web

El dólar se acercaba peligrosamente al límite superior de la banda acordada por Milei con el FMI. El 1 de septiembre tuvo una de las subas más fuertes en meses. A la gestión económica oficial le entró la desesperación completa y rompieron las condiciones del acuerdo con el FMI. Es una nueva confesión del fracaso de este gobierno también en el que supuestamente es su punto fuerte, el económico.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas, anunció el 1 de septiembre que el Tesoro intervendría en el mercado de cambios en un intento desesperado de frenar la corrida justo antes de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

El Tesoro y el acuerdo con el FMI

El anuncio en abril de un nuevo acuerdo con el FMI fue una confesión del fracaso completo del plan económico. El Estado argentino está en default, no puede pagar sus deudas, no puede sostener el tipo de cambio, y los dólares del FMI vinieron a sostener con un hilo un “plan” que se derrumbaba.

El acuerdo con el Fondo incluía un “dólar flotante” de entre 1000 y 1400 pesos el dólar en reemplazo del “dólar oficial”. Lo presentaban como una “banda”; es decir, que el dólar no necesariamente debía irse a 1400 pesos. Para finales de agosto, el límite superior de la banda ya estaba en 1468 pesos. Por algo la “banda” de oscilaciones era hacia arriba y no hacia abajo.

El acuerdo con el FMI era que el Banco Central no iba a intervenir en el mercado de cambios a menos que se superara el límite superior de la “banda”. Pero anunciaron la intervención con el dólar cotizando 1390 pesos.

Se apoyan en un tecnicismo para no romper el acuerdo con el Fondo: es el Tesoro el que interviene para frenar la escalada del dólar, no el Banco Central. Es decir, que es con el dinero del ajuste, lo arrebatado a jubilados y discapacitados, que venden dólares lo más baratos posible para evitar una corrida y la consecuente disparada de la inflación y las divisas. Esos dólares iban a pagar futuros vencimientos de deuda.

La gestión Milei-Caputo compra tiempo ahora con dólares frescos y abandona el futuro, aún el más próximo. Lo hacen presas de la desesperación: temen que la situación económica se les descontrola antes de las elecciones, lo que podría precipitar el completo desgobierno del país.

Hace algunos meses, todavía se atrevían a decir la estupidez de que el dólar podría irse a 600 pesos. Podría ser cierto que no hay



devaluación si no fuera mentira: en las circunstancias actuales, en las que el Banco Central vende dólares para que no se dispare la cotización, la “banda” anunciada es una lenta devaluación, que tienda a acelerarse a medida que pasan los meses.

La venta de dólares del Tesoro muestra unos niveles de desesperación que no se pueden ocultar. Están tratando de contener en el corto plazo, con consecuencia en unos pocos días, con el dinero con el que iban a pagar vencimientos de deuda, con consecuencia de años. Entre septiembre y diciembre se suman vencimientos de más de 20 billones de pesos. La única manera de no tener que pagar esa suma ridículamente alta es “reperfilándola”; es decir, pateándola para adelante y haciéndola crecer. Además, en enero hay un vencimiento por 4300 millones de dólares, que nadie sabe cómo se pagarán.

Básicamente, están usando fondos inmensos que no se recuperarán nunca más para contentar a los amigos de la bicicleta financiera. Y ese tipo de gobierno conoce una sola manera de solucionar ese problema: haciendo que la cuenta la paguen las mayorías y volviendo a endeudar al país.

Las razones de la suba del dólar

Las razones son de dos tipos: en primer lugar, obviamente, económicas; en segundo lugar, políticas. La crisis política de los escándalos de los audios de la corrupción es un detonante, una chispa que prende un polvorín ya muy cargado.

Por ahora es, tal vez, un poco prematuro hablar de “corrida contra el peso”, pero de mínima se una suba muy fuerte de la cotización del dólar que pone en riesgo todo el esquema económico oficial a días de las elecciones más importantes del año, hasta el momento.

La estabilidad del dólar es una de las cosas más sagradas de la política oficial. Todo se puede sacrificar en el altar de mantenerlo estable junto al índice de inflación.

1- La causa estructural fundamental de la suba del dólar en Argentina, la estructural, trasciende a este gobierno. Argentina necesita más dólares para funcionar que los que puede conseguir. Faltan dólares porque la economía argentina no puede vender por ellos más que lo que compra con ellos. Para cambiar eso es necesaria una transformación profunda de la estructura económica argentina: con destrucción permanente de entramado productivo o con un salto en la inversión y el desarrollo.

2- La premisa de la política económica de Milei, que el origen de todos los problemas es el déficit fiscal, es completamente falsa. El ajuste es un fracaso y ha perdido todo su sentido de ser. La presión sobre el dólar (y, en definitiva, inflacionaria) sigue creciendo a pesar de los recortes feroces y el superávit.

3- No hay analista, ni inversor, ni exportador o importador que no sepa que el tipo de cambio está atrasado. La cotización oficial del dólar no tiene nada que ver con la realidad. Los capitalistas vienen sistemáticamente escapando de los bonos del gobierno para irse al dólar, y la gestión económica toma una medida desesperada tras otra para intentar contenerlo.

4- Vinculado con lo anterior, el acuerdo con el FMI de abril fue una confesión del fracaso completo del “plan” económico de Milei y Caputo. Simplemente, no tenían los fondos para sostener el dólar y la inflación.

5- El fracaso económico del mileísmo es fracaso político y el fracaso político es fracaso económico. La gestión del dólar y la mayor parte del capital dinerario de Argentina están en manos del gobierno y los bancos, y cuando los capitalistas desconfían de la fuerza del gobierno para obtener resulta-

dos, se escapan de la gestión conjunta para resguardarse. Se van de los bonos como las LEFIs y las LEBACs para irse al dólar.

6- El gobierno se ha mostrado sumamente débil en las últimas semanas y está probablemente en su peor momento desde que asumió. El escándalo de las coimas fue una fuerte ráfaga de viento político sobre un débil castillo de cartas económico. Toda seguridad política comienza a desvanecerse tras recibir un golpe atrás de otro desde el día de la aparición de los audios de Spagnuolo.

Tasas de interés altas, política recesiva

Semanas antes, la política económica oficial había sido la de intervenir sobre la cantidad de dinero líquido de los bancos para evitar que compren dólares o presten pesos a bajas tasas de interés. Cualquiera de las dos opciones podía disparar la inflación.

Los bancos buscaron disponer de mayor liquidez y atraer nuevas colocaciones en plazos fijos e instrumentos similares. Por eso comenzaron a ofrecer tasas de interés más altas para estas colocaciones. Además, la sola restricción de la cantidad de dinero con el aumento de los “encajes” era suficiente para que se disparen las tasas de interés.

Pero esto tiene como consecuencia que las tasas en general (incluidas las de los préstamos y el financiamiento de las tarjetas de crédito) acompañen este aumento. No sólo esto, al ser más alta la tasa y más necesaria la liquidez, los bancos aumentan los requisitos para prestar, por temor a la insolvencia.

Todos los bancos han aumentado sus tasas de referencia en varios puntos y, en la mayoría de los casos, se ubicaron por encima del 50% anual, muy por encima de la inflación esperada para este año.

Caputo confesó que “podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones”.

El resultado de esta política económica es que el préstamo de dinero es ridículamente caro, ningún capitalista quiere endeudarse, caen las inversiones y se profundiza la caída económica. También se vuelve más caro el uso de la tarjeta de crédito, por lo que termina siendo un fuerte desincentivo de un consumo ya en crisis.

Los grupos sociales que ganan con el mileísmo se achican. La industria viene particularmente golpeada. El INDEC publica cada mes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que anticipa el comportamiento del PBI. En junio cayó 0,7% respecto a mayo (serie desestacionalizada). La actividad está estancada desde diciembre. Las fuertes tasas de interés aplicadas para contener el dólar probablemente acentúen la caída en julio y agosto. ■

FENTANILO | Hay responsabilidades políticas

Los recortes y la desregulación se cobran la vida de más de cien personas

José Valdés

Izquierda Web

Es imposible no poner el ojo en los despidos y desregulación que vienen sufriendo tanto el sistema de salud a nivel nacional como la ANMAT, la principal entidad en cuestiones de control de calidad y distribución de, entre otras cosas, medicamentos.

¿Se desregula y ajusta el control de medicamentos y hay muertes? A nadie debería parecerle casualidad.

“El ANMAT me decía que revisaba el fentanilo. Si no estaba el ANMAT, yo hubiera hablado con mi médico y me hubiera cuidado mejor”, expresaba el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, en una descarada defensa de los recortes y la desregulación de la salud del país.

A principios de diciembre del año pasado, a poco más de un año de la asunción del gobierno en curso, la ANMAT detectó irregularidades críticas en el desarrollo de fentanilo de Laboratorios Ramallo, la cual produce para la firma HLB Pharma. Los documentos internos de la entidad nacional confirmaban irregularidades no solo en la elaboración de dicha droga, sino también en todas las áreas claves intervinientes en el manejo de la sustancia, desde documentación deficiente hasta falencias críticas en el control de calidad. Las advertencias a dichas empresas se vienen sosteniendo desde octubre de 2023, según detalla el Boletín Oficial, y que las acusan de falencias en varios de sus otros productos.

Recién en febrero de este año, a 2 meses de conocerse las fallas graves del laboratorio, se ordenó el corte de producción de medicamentos en la planta farmacéutica localizada en la provincia de Buenos Aires. La información recopilada hasta ese momento era ya completamente suficiente para tomar medidas mucho más drásticas. De hecho, ya hacían urgente que así se hiciera. La tardía orden de detener la producción dio tiempo para la elaboración de un nuevo lote de fentanilo y su distribución, el lote 31202, el cual vio la luz apenas días después de la visita de la ANMAT al laboratorio. Sus ampollas registraban restos de patógenos relacionados a infecciones respiratorias.

Se trata de un claro caso de inoperancia del gobierno nacional, y las muertes son consecuencia de la desregulación sobre el sector de salud.

En abril de 2025, el Hospital Italiano de La Plata informó de un brote de estas infecciones en pacientes internados en terapia intensiva. La investigación llevada adelante dio con el hallazgo de las bacterias mencionados en las ampollas ya suministradas. Es decir, si bien se emitió una alerta en todo el territorio nacional para que no se siga utilizando el lote contaminado, tuvieron que pasar más de 60 días que se tomen medidas concretas. En el medio, expusieron la salud de cualquier



persona que debiera someterse a una operación compleja o que ya se encontraban en una situación delicada, y con la que debía hacer uso del fentanilo. Si se hubiese actuado a tiempo después de las inspecciones del año pasado, el lote no se habría fabricado, y el futuro de las personas víctimas del mismo podría haber sido otro.

Además, la administración provincial también se encuentra en el foco del problema por medio del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, quien ejerce el cargo desde julio de 2021. El gobierno provincial de Axel Kicillof es uno de los principales clientes de ambos laboratorios, y no actuó frente a las poco efectivas pero existentes alertas sobre los insumos producidos que circularon a lo largo de los últimos años. El ministro a su vez es hermano del juez Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, lugar donde tramita la investigación judicial. Dicho vínculo familiar le da excusas al gobierno nacional para intentar recusarlo de la causa, entorpeciendo aún más. La única intención del milésimo es, claramente, desviar la atención de sus propias responsabilidades.

Uno de los principales investigados en la causa judicial es Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo SA.

Es claro el pésimo manejo que se tuvo desde todos los sectores involucrados, pero es necesario hacer énfasis en las políticas de ajuste y recortes que se vienen llevando adelante desde el despacho de Sturzenegger. Entre despidos, falta de personal y sueldos pisados que perdieron más de 20 puntos frente a la inflación, era evidente que una situación similar podía llegar a pasar. La cita del ministro a comienzos de la nota lo pone en el centro de las responsabilidades. Es absolutamente imposible que pacientes o médicos controlen si los medicamentos están contaminados. Sabe que está mintiendo. Lo único que quiere hacer es justificar arrebatarse la salud pública a la mayoría para enriquecer a la minoría.

Es imposible concebir la demora en la intervención de las plantas farmacéuticas

sin tener en cuenta el accionar de las autoridades de la ANMAT y su directora, Agustina Bisio.

García Furfaro, que se encuentra detenido, declaró que el medicamento suministrado no fue la causa de las muertes porque supuestamente cumple con los criterios de calidad y seguridad para su uso. Obviamente mintió. Tanto él como un grupo de 16 o más personas están siendo imputadas por las decisiones tomadas sobre “la fabricación, la distribución, la venta, la omisión de recuperio farmacéutico y la adulteración” de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo.

En la mayoría de los casos analizados por el Cuerpo Médico Forense se ha concluido que la infección generada por las bacterias presentes en el fentanilo agravó lo suficiente el cuadro de los pacientes como para provocar la muerte. El uso de fentanilo en quirófano o terapia intensiva, de acuerdo con las historias clínicas, fue en los meses de marzo, abril o mayo.

Hoy se conoce que, en el mes de abril, la ANMAT recibió una planilla desde el Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia (integrado por 18 asociaciones provinciales de anestesiología) con 26 casos de meningitis aséptica, sobre intervenciones de bajo riesgo. En todos tenían en común que habían recibido fentanilo producido en la planta de Laboratorios Ramallo para HLB Pharma.

Con los días, la investigación dentro del programa determinó, entre otros resultados, que se habían utilizado dosis de fentanilo del mismo lote: 31.202. Surgió la sospecha de que, en el caso de los medicamentos administrados, podía haber un desvío de calidad.

Más de un centenar de casos ya fueron puestos en alerta. Ante los sucesos, el juez Kreplak revocó el rol de querellante del Ministerio de Salud. En la resolución el juez explica que la información que tienen hasta ahora “ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o con-

vencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional”.

Eso involucra directamente a la ANMAT y su directora. La entidad ya había sido notificada ante las irregularidades que aparecieron en los informes de control sobre las firmas farmacéuticas. Es decir, tenían la información y actuaron tarde, dejando abierta una ventana que permitió la elaboración de los lotes que se encuentran bajo la lupa.

Desde ya que todo conduce al Estado. Desde la designación de la directora de la ANMAT, las advertencias que dejaron pasar, la tardanza inexplicable para intervenir la producción en los laboratorios, es inimaginable pensar que el gobierno nacional no estuviera al tanto de nada. De no haber actuado como lo hizo, las muertes se podían evitar.

Que hayan revocado al Ministerio como querellante es una gran noticia. Ya de por sí fue extraño que ocupara dicho rol, como si fuera un damnificado o tuviera algún interés afectado que legitimara su involucramiento en la causa.

“Esta circunstancia obliga a reconsiderar el rol de querellante que oportunamente se otorgara al Ministerio de Salud de la Nación, toda vez que no puede ignorarse la posible existencia de intereses encontrados en torno al rol que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional pudieran eventualmente detentar en el proceso con el devenir de la investigación”, describió Kreplak al respecto.

Para colmo, el titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, Pablo Yadarola, procesó a Furfaro por presunta subfacturación de importaciones a través de HLB Pharma y Alpharma. Ambos laboratorios habrían importado maquinaria de China entre marzo y agosto de 2022, mediante una operación de US\$5 millones. El eje de la denuncia es que la cifra real de la operación habría sido de US\$500.000.

Se ha vuelto innegable la responsabilidad del gobierno sobre el asunto. Responsabilidad que hoy en día existe como tal, pero dependiendo de la investigación que se está llevando adelante, podría involucrar aún más a Sturzenegger, Lugones y compañía.

Entre muertes, empresarios sucios por demás, y la ineptitud de nuestros gobernantes, nos preguntamos: ¿Hasta dónde van a llegar para seguir beneficiando sus bolsillos? ¿Cuál es el costo que tenemos que pagar para ello? Estamos hablando de la segunda masacre más grande en cantidad de víctimas de la historia reciente del país, después de Cromañón. Sí, “masacre”, porque la negligencia y el ajuste de este gobierno los pone en lugar de culpables. Porque Sturzenegger y compañía, entre silencios y declaraciones que oscurecen más de lo que aclaran, demuestran que la “libertad” para los ricos, como los dueños de HLB Pharma, la están consiguiendo a costa de las vidas de los demás.■

Inteligencia artificial, algoritmos y repartidores

Detrás de términos como inteligencia artificial, algoritmos o machine learning se enmascaran muchas formas de trabajo distintas. Detrás de la computación a gran escala está la explotación del trabajo. Los paros realizados en Brasil, el surgimiento del SiTraRepA, el Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas y la presencia de repartidores en la lista Izquierda Anticapitalista del Nuevo MAS para las próximas elecciones nacionales, son parte de la contracara de organización y resistencia contra las nuevas formas de explotación del capitalismo del siglo XXI.

Mateo Romero

Izquierda Web

“El tiempo lo es todo, el hombre no es nada; es, a lo sumo, el esqueleto del tiempo”.

La miseria de la filosofía, Marx.

“La expansión de los sistemas de IA y la automatización de los procesos nos dice que vivimos en una época de colaboración beneficiosa entre las personas y la IA. Pero esta colaboración no se negocia de manera justa. Los términos descansen en una asimetría de poder significativa; de hecho, ¿existe siquiera la posibilidad de no colaborar con sistemas algorítmicos?”

Atlas de IA, Crawford.

En Argentina hay más de 160 mil trabajadores de reparto por aplicación, según lo indicó un informe presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Con salarios de miseria, no son reconocidos como trabajadores por las empresas que los contratan, no tienen seguro, ART u obra social, pero garantizan ganancias millonarias. Es un sistema ya instalado en el mundo y que explotó con la pandemia. Pero hay otro elemento también “novedoso” en esta forma de explotación: la implementación del algoritmo y la inteligencia artificial.

Nadie conoce mejor que un repartidor *la lógica perversa de los algoritmos*, basada en la eficiencia, vigilancia y automatización, que giran en torno a un enfoque computacional de la organización del trabajo. Bajo el gobierno de Milei, pero también con figuras como Trump, Musk y Bezos, abanderados del ultracapitalismo, las viejas formas de *explotación laboral con nuevas ropas* toman el centro de la escena. Y *detrás* del humo de los discursos podemos ver cómo la mano de obra, el capital y el tiempo están entrelazados en sistemas de inteligencia artificial.

Detrás de términos como inteligencia artificial, algoritmos o *machine learning* se enmascaran muchas formas de trabajo



distintas. Detrás de la computación a gran escala está la explotación del trabajo.

La IA y los algoritmos definen significativamente la experiencia de los trabajadores por aplicaciones como Uber, Rappi o PedidosYa. Están diseñadas para tratar de optimizar las operaciones (a favor de las empresas, claro está), influenciando el comportamiento del trabajador y determinando sus ingresos.

Los modelos de *aprendizaje computacional* o *machine learning* analizan *información* en tiempo real (tráfico, hora, clima, eventos) para predecir la demanda y definir ofertas e incentivos, tanto para el consumidor como para el repartidor. Esto lleva a que los repartidores busquen estar disponibles en los tiempos de mayor demanda, cuando a veces hay un mínimo aumento en la paga. Lo cual, al mismo tiempo, genera inestabilidad en el sueldo del repartidor, ya que distintos eventos generan incertidumbre e imprevisibilidad en el trabajo. El repartidor, y muchos otros trabajadores que trabajan en condiciones similares, se sienten presionados a trabajar en áreas u horarios de mayor demanda para maximizar la ganancia.

Al mismo tiempo, es el algoritmo el que asigna el trabajo y el reparto, ya que se basa en la proximidad del repartidor, el tiempo estimado de la entrega, el puntaje del repartidor y las preferencias del cliente. Y todos estos datos son actualizados permanentemente, con cada interacción y compra nueva. Aquí hay otro problema: la poca transparencia en las asignaciones. Cualquier comportamiento aleatorio, o resultado de un accidente laboral, cansancio o tráfico, afecta negativamente al repartidor. Esto lleva a que no se les asignen repartos, o se les asigne trabajos que tienen poca o nula ganancia (por ejemplo, repartos de mucha distancia). El trabajador tiene nulo control sobre estas decisiones automáticas.

Como se mencionó anteriormente, la IA lleva un registro de todas las métricas del trabajador: cuántos repartos acepta (y cuántos rechaza), tiempos de entrega, la evaluación del cliente. Y todas esas métricas generan una evaluación del rendimiento del trabajador, lo cual en última instancia puede llevar a una desvinculación de esos repartidores, sin mediar ninguna indemnización, explica-

ción, ni posible defensa. Esto se basa solamente en especulaciones y métodos probabilísticos que determinan automáticamente y discrecionalmente, según los ingenieros que programaron esos algoritmos, cuándo un repartidor deja de generar ganancias suficientes a la empresa. Es la quintaesencia de la despersonalización: son métricas totalmente fuera de contexto y no tienen en cuenta nada de la vida del repartidor.

Esta constante vigilancia y medición crea una presión para mantener altos los *ratings* del repartidor, sin importar los impactos negativos que pueda tener en la salud del mismo. Los trabajadores son controlados por unos sistemas oscuros y difíciles de explicar.

El viejo discurso sobre la expansión de la automatización de los procesos, hoy renovado con la IA, dice que se vive una época de colaboración beneficiosa entre seres humanos y la IA. Colaboración... hoy son todos colaboradores, socios emprendedores de las grandes empresas. Ese es el slogan que repiten los dueños de estas gigantes aplicaciones, pero la asimetría es perversa.

Cuando una empresa introduce una nueva plataforma de IA, algo que sucede prácticamente todos los días en casi cualquier espacio de trabajo, los trabajadores no tenemos ni voz ni voto sobre la decisión de usar esa herramienta o no. Aun en temas tan sensibles como la educación y la salud, en los que se están implementando técnicas de aprendizaje automático para tomar decisiones, ninguna IA está sujeta al más mínimo escrutinio por parte de los trabajadores. Una muestra es el anuncio del gobierno nacional de que incluirá la inteligencia artificial en las escuelas argentinas. Algo que repiten los gobernadores de todas las provincias con distintas reformas.

La *inteligencia artificial* y los sistemas de *aprendizaje automático* necesitan de un flujo continuo de datos, y hoy los gobiernos, aliados con las empresas, les están dando esos datos personales, llevando adelante lo que llaman “minería o extracción masiva de datos”, sin el menor consentimiento, o siquiera alerta, de lo que se realiza y para quién, ni en beneficio de quién.

Claramente, estas herramientas tienen muchísimos beneficios para la sociedad, pero no bajo el control de gobiernos y empresas capitalistas. “La expansión actual de la automatización de la mano de obra continúa la dinámica histórica inherente al capitalismo industrial”, afirma Kate Crawford, investigadora de Microsoft Research Lab y crítica de la IA. La “nueva” modalidad tiene la ventaja de que accede a la vida privada, a las métricas, al comportamiento y a los datos de los trabajadores, como solo podían soñar los supervisores de las líneas de producción como Ford, que controlaban con un cronómetro cada movimiento de sus empleados.

El mismo papel que cumplen los supervisores en las fábricas y espacios de trabajo hoy es en gran medida delegado a las tecnologías de vigilancia y las aplicaciones. Los gerentes (y los gobiernos) usan una amplia gama de tecnologías para vigilar a sus empleados. En las ciudades ya casi no hay rincones sin monitorear por cámaras CCTV, que analizan y detectan comportamientos. Los datos de los repartidores y trabajadores se usan para hacer predicciones sobre quién podría estar alejándose de las metas de la empresa o quién podría estar organizándose con otros trabajadores. Aunque muchas veces, detrás de la pantalla, también hay humanos que simulan ser IA: detrás de muchos bots e interacciones en apariencia automáticas hay mucho trabajo tercerizado.

Cada vez que validamos que “somos humanos” en una interacción con una página web, por ejemplo, nos piden que identifiquemos algo que una IA o un robot tendrían dificultad en identificar. Esas herramientas, conocidas como *captcha*, se basan en nuestra interacción

para entrenar IA de forma gratuita, trasladando el trabajo de un empleado a un cliente. De la misma forma que lo hicieron con los repartidores, que antes tenían una relación de dependencia directamente con los locales de comida. Similar es lo que quieren hacer con los surtidores de combustible, sacando a los playeros de en medio, y que ya vienen “automatizando” con surtidores inteligentes que actualizan el precio del combustible en tiempo real (ojalá el salario de un conductor de Uber, o el de cualquier trabajador, fuera así de inteligente). Otro caso es el de los supermercados con autoservicio: el cliente le abarata el costo del cajero al supermercado. Son estas las “nuevas” lógicas de automatización, que avanzan sobre derechos y condiciones laborales. Muchos sistemas automatizados, como Uber, Rappi, PedidosYa, presentan esta combinación de trabajadores digitales y de a pie mal pagos, y consumidores que realizan tareas no remuneradas (todas las encuestas y evaluaciones que permanentemente saltan en la pantalla) para que la aplicación funcione.

Aquí también podrían entrar las nuevas reformas educativas, que forman justamente personas para este mercado laboral, en el que los trabajadores solo tengan que leer y poder realizar tareas cada vez más micro. Solo necesitan alguien que pueda hacer tareas tediosas y repetitivas para llenar sistemas automatizados.

El control del tiempo se ha vuelto paradójicamente instantáneo en las industrias de servicios, reparto y comida. Se llega a contar hasta los segundos. Es parte de todos los días escuchar hablar de tiempos de interacción, reacción, metas que deben cumplir los repartidores, etc. Las asignaciones de turnos, o el tiempo de trabajo de un repartidor son muy inestables. Los pedidos que se determinan a partir de algoritmos pueden variar desde tiempos muy cortos, apenas unos minutos, a turnos de varias horas durante el pico de demandas y dependiendo de la rentabilidad. El algoritmo no tiene en cuenta el costo humano de los viajes, el combustible, el cansancio y ni hablar de los accidentes. Lo cual lleva al repartidor a una incapacidad de predecir su propio horario de trabajo.

No debería sorprendernos por lo tanto, las protestas y el protagonismo que tienen hoy en día los trabajadores de reparto por aplicaciones. Los paros realizados en Brasil, el surgimiento del Sitrapa, el Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas y la presencia de repartidores en la lista Izquierda Anticapitalista del Nuevo MAS para las próximas elecciones nacionales, son parte de la contracara de organización y resistencia contra las nuevas formas de explotación del capitalismo del siglo XXI.■

CADA DÍA MÁS POBRES |

Piñas van, piñas vienen... pero el salario no se mueve

José Valdés

Izquierda Web

Ruido de espadas partidarias, brócolis lanzados por catapultas, Espert huyendo a bordo de su corcel maravilla mientras una turba enfurecida pide por su pelada. El pico de una batalla campal que se viene desatando hace ya varios meses, dentro del marco de las elecciones de medio término. Un panorama desolador, donde abundan la violencia y el hambre. Y ahí, en el centro de la cuestión, pasando casi desapercibido, el salario. Embarrado hasta el aginaldo y ya sin fuerzas.

La crisis económica que enfrenta el país es cada vez más profunda y sus secuelas, que ya brotaron dentro del bolsillo de las y los trabajadores, adquieren un sentimiento de permanencia. Ya es moneda corriente saber que no se llega a fin de mes. Que por más multiempleo al que la gente se someta, por más horas extras que se hagan, no alcanza. Eso sí, con todo el viento del mundo en contra, tampoco es la peor de las situaciones si tenemos en cuenta el contexto de los más de medio millón de desocupados, solo contando la provincia de Buenos Aires.

Según los datos oficiales del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), sistema estatal gestionado por el ANSES, el salario sigue cayendo mes a mes, y ya acumula un 5,5% de baja. Hoy nuestro sueldo es menor al valor real en el que estaba en noviembre de 2023. Esto se traduce en una pérdida directa del poder de compra el cual, a su vez, también se ve afectado a causa de la inflación y las miserables paritarias del 1% y 1,5% que se vienen implementando desde que asumió Milei.

En base a la información recopilada por la consultora especializada Bumeran, casi el 60% de las y los trabajadores no tuvo un aumento de salario en lo que va del año. A su vez, solo el 25% de los expertos que colaboraron con las proyecciones del estudio calcula subas reales de salarios este año.

En cuanto a la proyección sobre el futuro del mercado laboral, el pantallazo no es muy esperanzador. Varias empresas han confirmado que planean reducir su plantilla de empleados en lo que resta del año, cuestión que viene sucediendo hace tiempo. Más del 60% de los consultados reportó despidos en el primer semestre y el 36% fundamentó la decisión por recorte de costos.

Contrariamente a los planes del gobierno nacional, que insiste con el discurso de la reforma laboral, la situación es tan mala que hasta varios sectores del empresariado valoran negativamente las políticas impulsadas por Milei y compañía.

Las imágenes de la crisis ya son habituales y vienen en aumento. No es casual lo que sucedió esta semana en Lomas de Zamora, donde un gran número de manifestantes repudiaron la aparición del presidente y su candidato a diputado nacional, José Luis Espert. Los nervios y la desmoralización a la que se está viendo sujeta la población frente al ajuste y los despidos que se vienen realizando desde el poder ejecutivo son un caldo para que ocurran este tipo de acciones.

El salario sigue bajando mientras que los despidos aumentan y la desesperación se vuelve cotidiana. Hace dos semanas sorprendieron las largas filas de jóvenes y adultos en el ingreso a la Expo Empleo Barrial, en el cual se ofrecía la mísera suma de 450 vacantes. En la provincia de Córdoba se amontonaron dos cuadras de personas, previo a un evento similar.

El desempleo en la ciudad de Buenos Aires subió al 7,8% en el primer trimestre del año. En total, se registraron 132.000 desocupados en el primer tramo de 2025, contra los 113.500 que se habían registrado en el cuarto trimestre de 2024.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires presenta un horizonte aún peor. La desocupación se disparó al 9,3%, según un informe del Ministerio de Economía bonaerense, y expone un deterioro sostenido del mercado laboral, especialmente entre mujeres y jóvenes. Allí también se alertó sobre un crecimiento de la subocupación, la informalidad y el cuentapropismo en detrimento del empleo asalariado, lo que configura un deterioro estructural del mercado de trabajo bonaerense.

Más allá de la banalización a comienzos de la nota, hay algo que es claro. El país se sumerge en una de sus crisis más profundas de la historia reciente, y al gobierno de turno no se le escapa una idea como para paliar sus consecuencias. Ni siquiera intentan hacer algo de buena letra como para que el tiro, próximo a salir por la culata, no sea del tamaño de un adoquín. Incluso sabiendo que el proceso de debacle económica que vivimos tiene varios años y gobiernos en desarrollo, las medidas y contrarreformas impulsadas por el oficialismo, y su afán por promulgarlas de la manera más ordinaria jamás vista, hace que la cosa se caliente más.

Hace diez años que el país no crece, evidenciando el desgate del sistema en el que vivimos. Y el contexto electoral no ayuda. Los problemas estructurales del país se difuminan ante la bajada de línea de los medios masivos, ante escasas promesas de campaña y el porotismo. Salvo el Nuevo MAS, ningún otro partido o alianza electoral pone el foco algo fundamental como el salario. Hoy más que nunca es necesario salir a enfrentar al gobierno en las calles y apoyar un plan alternativo a la derecha para poder cambiar el rumbo de las y los trabajadores.■

SE LANZA MANUELA CASTAÑEIRA Y LAS Y LOS CA

“QUIERO IR AL CONGRESO NACIONAL POR

CON PRESENCIA EN 13 PROVINCIAS, INCLUYENDO LAS DE MAYOR PESO ELECTORAL (CABA, PBA, CÓRDOBA, SANTA FE Y ME. ATRAVESADA POR UNA PROFUNDA CRISIS DEL GOBIERNO DE MILEI, Y LA PASIVIDAD DEL PERONISMO. EN ESE MARCO EN LAS ÚL Y MEDIOS PARA PONER EN EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN POLÍTICA LA NECESIDAD DE UN SALARIO QUE PARTA DE LOS 2

MANUELA CASTAÑEIRA:

“EL AJUSTE FISCAL FRACASÓ, ECONÓMICA Y MORALMENTE”

Manuela Castañeira, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las listas del Nuevo MAS, conversó con Mauro Federico, uno de los periodistas que están bajo el ataque del gobierno de Milei a raíz de la difusión de los audios que incriminan a Karina Milei en el caso de las coimas en el área de discapacidad.

La referente de la izquierda comenzó su participación solidarizándose con Mauro ante el intento de “censura previa que les quieren imponer” la Casa Rosada, así como el “amedrentamiento de la patotera de Patricia Bullrich, que los amenaza con allanarles sus hogares”. Destacó como “muy valioso lo que hicieron con Jorge, brindarle esa información que la sociedad tanto necesitaba para conocer hasta el fondo lo podrido que está este gobierno”.

Además, indicó que es “un derecho de la sociedad conocer cómo se han manejado en el lugar que es más sentido en este momento por la sociedad, en el lugar de los más vulnerables, que es la discapacidad”.

“La información que ustedes han brindado es importantísima y generó la respuesta de Lomas de Zamora”, en referencia a la movilización espontánea que hace unos días protagonizaron los vecinos de la comunidad contra la caravana de Milei. “Hay un antes y un después de Lomas de Zamora, porque la sociedad reaccionó contra este gobierno y dijo basta”.

Castañeira destacó que una de “las cosas lindas de la Argentina y que estos gobiernos fascistoides odian, es su solidaridad y su respeto por las libertades democráticas, que es la defensa incondicional del derecho a la información y de la libre expresión”.

También, denunció que el gobierno le robó al sector que le “dijeron que no había plata, que le dijeron en la cara a la mamá de Ian Moche que no había dinero para su hijo con discapacidad (...) Ese sector es al cual le fueron directamente a robar”.

Por último, la referente de la izquierda señaló que “hay una crisis muy profunda de la política social y de gobernabilidad”, lo cual da cuenta de que “el ajuste fiscal fracasó, económicamente y moralmente”, ante lo cual se “impone la discusión de alternativas”.



“Ahí nosotros, humildemente, pero con mucha alegría y con mucha garra, queremos presentar alternativas. Por ejemplo, lo opuesto al ajuste fiscal (...) Yo quiero presentar nuestra propuesta del salario mínimo vital y móvil que parta de los 2 millones de pesos”, el cual debe salir de “la guita del ajuste fiscal. Del 75% que le están pagando de interés a los bancos. De la guita que se lleva del 3% de Karina. De la guita que se están robando con las ópticas del PAMI”.

Manuela calificó el ajuste del gobierno como un acto de “crueldad que, además, no tiene ningún resultado económico de estabilidad para el país”. Por eso, pretende llevar la propuesta del salario “al Congreso, porque creo que es lo común en lo diverso. Se hablan muchos temas que duelen en nuestro país (...) Sin embargo, no hay ningún otro candidato ni lista que lo esté nombrando [se refiere al salario]”, y, por lo tanto, “no llega al Congreso. Bueno, quiero ir al Congreso a hacer un escándalo nacional por el salario”.

“Creo que las mujeres anticapitalistas tenemos varias cosas que decir y es el momento que tengamos esos espacios también para poder decirlo”, concluyó Castañeira. ■



FEDERICO WINOKUR: “HAY QUE CAMBIAR LA LÓGICA EN LA QUE SE ORGANIZA LA SOCIEDAD EN NUESTRO PAÍS”

Federico Winokur, candidato a diputado de CABA por el Nuevo MAS, participó del programa “Código de Barras”, en el cual habló sobre las inquietudes que afligen a los trabajadores del país y expuso las principales propuestas anticapitalistas que presenta su espacio en las elecciones.

Arrancó señalando que “la principal preocupación de los trabajadores y los sectores populares dejó de ser la inflación y pasó a ser los ingresos. Yo estuve en un debate a candidatos de legisladores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fui el único que nombró el salario”.

Consideró lo anterior como “una cosa muy loca, porque justamente es de lo que se habla todo el día, de cuánto se gana” y, dando cuenta del crecimiento del pluriempleo, agregó que “todo el mundo tiene más de un trabajo, hoy todo el mundo hace Uber, todo el mundo hace Rappi para poder llegar a fin de mes”.

Más adelante, el referente anticapitalista enfatizó que desde el Nuevo MAS defienden “un salario mínimo de 2 millones de pesos y ¿por qué recalco el 1? Porque no queremos que haya que tener tres trabajos para poder llegar a un ingreso mínimo”.

Entre las medidas que defiende, indicó la instauración inmediata de “un impuesto a la riqueza permanente”, para afectar “a los sectores más ricos de

nuestro país, esos que se hicieron ricos en los últimos años”. En conclusiones, apuntó “cambiar la lógica que organiza la sociedad en nuestro país, defiende “una planificación de la economía por parte de los

Asimismo, Winokur explicó que los diputados anticapitalistas quieren cambiar la sociedad y no solo las propuestas que se hacen. “Entrar al Congreso puede venir desde abajo (...) Queremos bancar al servicio de hacer un trabajo por un salario mínimo de 2 millones de pesos, agenda del Congreso aparejada de las necesidades de la

Para lograr eso, sostuvo que se necesita en la movilización (...) ser diputados y diputadas ante nuestras bancas para cambiar la sociedad y no solamente para votar cuestiones que vienen desde el gobierno

Seguidamente, se refirió a la situación en las elecciones, de lo cual reafirmó que “A pesar de que tratamos de cambiar las cosas, hay que decir las cosas claramente, en 14 años que hubo una crisis de espacio de Myriam Bregman,

CANDIDATOS DEL NUEVO MAS EN TODO EL PAÍS

Nacional

A HACER UN ESCÁNDALO R EL SALARIO”

(Y MENDOZA), MANUELA CASTAÑEIRA Y LAS Y LOS CANDIDATOS DEL NUEVO MAS SE LANZAN A UNA CAMPAÑA ELECTORAL. LAS ÚLTIMAS SEMANAS SE HAN DESARROLLADO GIRAS POR LA PLATA Y MAR DEL PLATA, ADEMÁS DE DECENAS DE ACTIVIDADES POR 2 MILLONES DE PESOS PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y UNA SALIDA ANTICAPITALISTA ANTE LA CRISIS DEL PAÍS.



E CAMBIAR ANIZA LA PAÍS”

se hicieron mucho más ricos. En cuanto a cambios estructurales en la lógica en la que se organiza nuestro país”, por lo que defiende la división democrática y racional de los trabajadores”.
“Explicó que la función de los candidatos anticapitalistas tiene que tener como prioridad y no limitarse a votar, sino que viene desde arriba: puede ampliar una voz que no se oye”. Queremos poner nuestras banderas para hacer un escándalo nacional por el pago de 2 millones de pesos. La idea es que aparezca cada vez más disonancia entre las y los de arriba y los de las y los de abajo”.
“Estuvo que es necesario “apoyar la división (...) nosotros queremos las banderas anticapitalistas (...) Poner las banderas para cambiar de fondo la sociedad para votar sí o no algunas cosas desde arriba.”
“Fue la división de la izquierda y la responsabilidad al FITU: nosotros de cuidar un poco las fuerzas como son. Es la primera vez una reunión con el FITU, el egman, del Caño, de Solano, y



la respuesta que ellos nos dieron nos dio vergüenza ajena (...) ‘ponele que sacamos un diputado y lo tenemos que dividir entre cuatro, bueno, si entran ustedes lo tenemos que dividir entre cinco’”.
También, remarcó que el peronismo no tiene un programa para mostrar y, por tanto, no ofrece ninguna respuesta en una situación social donde se vive muy mal. Esto genera una contradicción entre la dirección peronista con sus bases, a las que Winokur calificó como “honestas y con las que nosotros nos encontramos en las calles continuamente”.
Finalmente, el candidato a diputado llamó a acompañar a las candidaturas anticapitalistas del Nuevo MAS, que son las únicas que defienden abiertamente “un salario mínimo de 2 millones de pesos para poder vivir y que tiene justamente una representación en trabajadores. Yo soy maestro en la ciudad y vivo de mi salario”.■

CÓRDOBA ENCUENTRO POLÍTICO CULTURAL CON LES CANDIDATES ANTICAPITALISTAS



El viernes 22 de agosto se realizó en Córdoba el Encuentro Político Cultural, un evento con estilo propio que dio inicio a nuestra campaña. Este evento surge de las distintas actividades políticas y culturales que venimos realizando en la Universidad desde nuestra agrupación estudiantil ¡Ya Basta! - la Izquierda en la UNC, como este año que hicimos los festivales anticapitalistas “Demoliendo Fachos”.
Asistieron más de 150 personas, compañeros de la facu, de los lugares de trabajo, escuelas, fábricas. Estuvieron presentes miembros de la directiva de UEPC Capital: Noelia García, María Pereyra y Eduardo Mulhall. Además fueron parte del evento los compañeros del Sindicato del Neumático que se encuentran dando una enorme pelea por la recuperación del Sindicato de la nueva y de la vieja burocracia con el armado de la lista Naranja - Marrón. Una lista que reúne el activismo del sindicato preocupado por la enorme cantidad de ataques que se vienen sufriendo, sobre todo los despidos, ataque que se ve renovado ante los despidos en Ruiz. Ataques que se dejaron pasar por la conducción de la Negra de Crespo y compañía.
También estuvieron presentes nuestros Consejeros de la Facultad de Filosofía y Humanidades: Franco Bergero por el HCD, Malena Mulhall por la Escuela de Historia y Yaveth Godoy por la Escuela de Filosofía.
Estuvieron presentes también compañeros trabajadores de reparto por aplicaciones,

miembros del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicaciones, un sector ultra precarizado, parte del nuevo fenómeno de la clase trabajadora del Siglo XXI que hoy en Argentina están peleando por el reconocimiento de la relación laboral y forman parte de un fenómeno internacional que se encuentra organizando el 2º Congreso de Trabajadores de Aplicaciones en Los Ángeles.
Estuvieron también compañeras feministas pertenecientes a la Asamblea NiUnaMenos, ámbito que lleva adelante hace años las numerosas y múltiples convocatorias que realiza el movimiento para la pelea por los derechos de las mujeres y diversidades.
El Encuentro tuvo una enorme riqueza y la fuerza de quienes estuvieron presentes y vinieron a bancar la campaña. No queremos dejar de lado que también estuvieron familiares y amigos, que nos hacen el aguante cotidianamente y rodean de solidaridad y apoyo nuestra pelea política.
Tenemos en claro que esta no es una campaña más, es una campaña contra el gobierno de Milei y tiene que tener fuerza para lograr poner en el centro del debate la enorme cantidad de reclamos que se acumulan bajo el gobierno de Milei. Y sobre todo para que tengamos voz y hagamos escuchar con nuevas bancas en el Congreso para hacer un verdadero escándalo nacional que ponga en el centro que el salario tiene que ser de \$2.000.000.■

Estallido social contra los privilegios y la represión del sistema

Johan Madriz

Nuevo Partido Socialista - Costa Rica

Desde hace varios días, Indonesia es atravesada por intensas movilizaciones contra la podredumbre del sistema político y el hartazgo de la sociedad ante las pésimas condiciones de vida, entre las que destacan cuatro millones de trabajadores precarizados por las empresas de aplicaciones. Así, el cuarto país más poblado del planeta, se suma a una ola de protestas (algunas rebeliones populares) con epicentro en Asia y con repercusiones en países de Europa del Este.

Las calles de Indonesia se transformaron en un escenario de furia popular desde el 25 de agosto, cuando miles de manifestantes salieron en Yakarta para denunciar los privilegios desmedidos de los legisladores. La chispa se encendió en la capital, pero rápidamente se expandió hacia Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta y hasta la lejana Papúa, en un arco de movilizaciones que une a estudiantes, sindicatos y trabajadores precarizados.

La revuelta, con el pasar de los días, se radicaliza en sus métodos. En Makassar, el parlamento regional ardió en llamas, mientras que en Yakarta se intentó tomar la sede de la policía. En muchas ciudades hay barricadas que paralizaron el tráfico. Tampoco se salvaron las residencias privadas de altos cargos, como la casa de la ministra de Finanzas que fue saqueada en Tangerang, y las viviendas de diputados como Ahmad Sahroni y Eko Hendro Purnomo.

Las instituciones públicas, como símbolos del poder, se convirtieron en objetivos de la indignación. Los edificios parlamentarios locales fueron atacados en Bandung y Yogyakarta, donde la multitud exigió una reforma de la policía y la confiscación de bienes a funcionarios acusados de enriquecerse a costa del pueblo.

Privilegios que encendieron la indignación

El punto de quiebre que provocó la crisis se ubica en la decisión del parlamento de otorgarse nuevos beneficios, en un país donde millones sobreviven con apenas unas monedas al día. Los 580 legisladores recibieron un incremento de salario del 33%, alcanzando ingresos cercanos a los 14.000 dólares mensuales, una cifra que contrasta brutalmente con el salario mínimo, que apenas cubre un tres por ciento de esa cantidad.

Como si fuera poco, se añadieron subsidios de vivienda de 50 millones de rupias — equivalentes a 3.100 dólares —, una suma que representa veinte veces el ingreso mensual de un trabajador en las regiones más empobrecidas del archipiélago.

Ese festín de privilegios desató la rabia colectiva, porque se aprobó en medio de un aumento del costo de vida, un desempleo creciente y nuevas cargas impositivas. La medida fue percibida como un insulto a quienes enfrentan la inflación desde la precariedad. Es la evidencia de una élite política que se alimenta de la desigualdad.

Las calles respondieron de inmediato. El subsidio y las dietas parlamentarias se convirtieron en el blanco de cánticos y pancartas que denuncian la obscenidad de la brecha social. Ante la presión, el presidente Prabowo Subianto no tuvo más remedio que anunciar la revocación de varios de estos beneficios.

Canceló las dietas adicionales, suspendió los viajes oficiales al extranjero y congeló las asignaciones especiales para los legisladores. Sin embargo, el retroceso del gobierno no logró calmar los ánimos. Para las mayorías empobrecidas, la indignación ya había cruzado un punto simbólico. La protesta no se reduce a un ajuste de cifras, sino que expresa el rechazo a un sistema político que legisla para sí mismo y condena a las mayorías a la pobreza.

La represión y la exigencia de una reforma policial

La respuesta a la movilización popular fue la misma que tantas veces se repite en estos contextos de crisis: represión brutal y criminalización de la protesta. La policía desplegó cañones de agua, gases lacrimógenos y vehículos blindados para dispersar a las multitudes en Yakarta, Surabaya y otras ciudades.

Las imágenes de uniformados cargando contra estudiantes y trabajadores, sumadas a los allanamientos nocturnos y las detenciones arbitrarias, convirtieron a las fuerzas de seguridad en otro blanco del descontento.

El intento de sofocar la protesta con violencia sólo alimentó aún más la rabia. Allí donde los gases no lograron desalojar las calles, la población respondió con piedras, cócteles molotov y fuegos artificiales. Las acciones contra los cuarteles policiales mostraron que la lucha no es únicamente contra los privilegios de los políticos, sino también contra el aparato que protege esos privilegios.

En ciudades como Yogyakarta y Solo se exigió una reforma de la policía, aunque de momento sin exigencias puntuales. A pesar de esto, lo que está claro es el papel represivo de la policía que, junto con su fama de corrupta, se sumó la indignación generada por la muerte del repartidor atropellado por un vehículo policial.

Una muerte que pudo ser la de millones

El 29 de agosto, en medio de los choques entre manifestantes y la brigada móvil de la policía, un joven repartidor de 21 años, Affan Kurniawan, perdió la vida bajo las ruedas de un vehículo blindado. Los testigos relataron que el coche atravesó la multitud sin detenerse y lo atropelló cuando realizaba una entrega de comida para una aplicación digital.

Su muerte se convirtió de inmediato en un símbolo de la violencia estatal y de la precariedad que sufren quienes sobreviven en la economía de plataformas. Miles de motociclistas, trabajadores de reparto y vecinos asistieron a su funeral, transformándolo en una demostración masiva.

No fue solo el duelo por una vida arrebatada de manera brutal, sino la expresión de un malestar social acumulado. Las calles de Yakarta se llenaron de caravanas de motoci-

cletas y pancartas que denunciaban tanto a la policía como a las condiciones de explotación que empujan a miles de jóvenes a arriesgar su vida en trayectos interminables por salarios miserables.

La figura de Kurniawan se erigió como la encarnación de esa doble opresión: la de un sistema laboral que condena a millones a la precariedad e inseguridad y la de un Estado que responde con represión a la protesta. Su muerte no apagó la revuelta; la multiplicó.

En las consignas que exigen justicia, en las barricadas levantadas contra las fuerzas represivas, se reflejaba la convicción de que esta tragedia no fue un “accidente”, sino el resultado inevitable de un sistema que desprecia la vida de las personas trabajadoras en nombre del beneficio capitalista.

Precarización y pobreza como norma

Esta muerte puso en el centro de la protesta un problema que lleva años carcomiendo la vida de millones: la precarización laboral. En Indonesia, el auge de las plataformas digitales como GoJek o Grab prometió oportunidades, pero terminó consolidando un modelo de explotación donde las personas trabajadoras cargan con jornadas de más de doce horas para ganar apenas unos dólares.

Más de cuatro millones de trabajadores y trabajadoras sufren las tarifas a la baja, las comisiones abusivas y la ausencia total de protección social. Esto hace que vivan en la cuerda floja, sin seguro médico ni garantía de ingresos mínimos.

Las huelgas de conductores organizadas en los últimos años por sindicatos emergentes como Garda o el SPAI ya habían colocado el problema en la palestra. Con chalecos verdes y pancartas improvisadas, las y los trabajadores de plataforma exigen desde hace años seguridad social, reconocimiento como empleados y un marco legal que frene los abusos de las corporaciones.

Sin embargo, el gobierno, aliado a estos gigantes empresariales, prefiere ignorar sus demandas. El resultado es un sector cada vez más empobrecido y fragmentado, obligado a resistir en la informalidad mientras sostiene buena parte de la economía urbana.

La precariedad no se limita al trabajo en plataformas. Más del 60% de la población vive por debajo del umbral de pobreza de países de ingresos medios-altos, según el Banco Mundial, lo que equivale a 171 millones de personas que deben sobrevivir con menos de 7 dólares al día.

La desigualdad alcanza niveles obscenos. Los cuatro hombres más ricos del país concentran más riqueza que los 100 millones más pobres juntos. Esta brecha marca todos los aspectos de la vida social, desde el acceso desigual a la educación y la salud, hasta la concentración de la tierra en manos de corporaciones.

Las protestas son parte de las luchas de la clase trabajadora informal, que durante años ha reclamado condiciones dignas frente a un modelo que reparte beneficios para unos pocos y miseria para la mayoría. La precarización es la norma que sostiene la acumulación de la élite económica y política en Indonesia.

Más allá de un hecho puntual

Las protestas no se explican solo por un subsidio escandaloso a los legisladores ni por la muerte de un joven repartidor. Ambos hechos fueron detonantes, pero lo que estalló en las calles es el fruto de un malestar acumulado durante décadas. En un país donde la mayoría de la población sobrevive en la pobreza mientras una minoría política y empresarial concentra la riqueza, la indignación se volvió incontrolable.

El gobierno intentó contener la crisis con represión y promesas de ajustes menores, pero ya no se trata de números en un presupuesto ni de revocar dietas parlamentarias. El problema es estructural. La precarización del trabajo, la corrupción de las instituciones y la violencia policial son parte de un mismo engranaje que perpetúa la dominación de clase.

Lo que estalla en Indonesia es la rabia de millones que se cansaron de cargar con la miseria, mientras se les pide paciencia en nombre de la estabilidad. Las manifestaciones son la expresión política de un pueblo que exige un cambio. El mensaje que retumba en las calles es claro: Indonesia no se levanta solo por un privilegio puntual ni por una muerte aislada, sino contra un orden social que condena a la mayoría a la pobreza para enriquecer a unos pocos.

La Plaza contra el Palacio

Por último, dejemos anotado que las protestas en Indonesia hacen parte de un ascenso de la lucha de clases con epicentro en Asia y con repercusiones en regiones de Europa del Este.

En agosto del año pasado, por ejemplo, la juventud encabezó una rebelión popular en Bangladesh que derribó al gobierno autoritario dirigido por la otrora primera ministra Sheikh Hasina. Igualmente, en diciembre de ese mismo año, fracasó el intento de auto-golpe de Estado en Corea del Sur, debido a las multitudinarias movilizaciones espontáneas que provocaron la salida del presidente ultraderechista Yoon Suk-yeol.

Asimismo, es preciso sumar el estallido social que atravesó Turquía en marzo contra las medidas autoritarias y represivas del gobierno de Erdogan, así como las multitudinarias movilizaciones en Serbia y Hungría contra los gobiernos autocráticos de Aleksandar Vučić y Viktor Orbán, respectivamente.

Lo anterior nos sirve para ilustrar algo que señalamos desde Izquierda Web y la corriente internacional Socialismo o Barbarie: aunque la coyuntura internacional en estos momentos es bastante adversa (como denota el genocidio en curso contra el pueblo palestino en Gaza), también existen fenómenos de lucha desde abajo que apuntan en el sentido contrario.

La emergencia de la extrema derecha y sus provocaciones contra los explotados y oprimidos, traen consigo la potencialidad de la reversibilidad de la situación; es decir, de que las sociedades (que son cuerpos vivos, no muertos) se harten y estallen en las calles contra los de arriba.■

GRAN CAMPAÑA DE AFILIACIÓN DEL CALIFORNIA GIG WORKERS UNION |

Los conductores por aplicación de California avanzan en la organización de su sindicato

Los trabajadores lanzaron una de las campañas de sindicalización más importantes en todo EEUU, para conformar el California Gig Workers Union (CGWU) como representación legal de los 800.000 conductores de la región.

Juan Pablo Pardo

Dirigente Nacional del Ya Basta

Tras más de una década de lucha, los conductores por aplicación de California, EEUU, dieron un gran paso adelante para lograr su sindicato. En un sector que no para de crecer, los trabajadores se organizan para enfrentar a las empresas de plataformas y, actualmente, se encuentran más cerca de poder tener voz y un organismo para pelear por sus salarios y condiciones de trabajo.

Esta semana se confirmó que el proyecto AB 1340 se convertirá en Ley en el Estado de California en las próximas semanas, al obtener el apoyo del gobernador de California y la mayoría del parlamento. Esta iniciativa permite a los conductores por aplicación, que trabajan para empresas gigantes en el rubro, como Uber y Lyft, constituir su sindicato a pesar de estar reconocidos legalmente como “contratistas independientes”, lo cual los habilita para la negociación colectiva sobre salarios y condiciones de trabajo.

En 2020, las empresas llevaron adelante una multimillonaria campaña para pasar una ley, la “Proposición 22”, que establecía el régimen de trabajadores autónomos para los conductores. La ley fue rechazada por anti-constitucional por los trabajadores y llevaron el caso hasta la Corte Suprema de California, la cual falló a favor de las empresas.

Para aprobar la Prop 22, Uber, Lyft y otras compañías, desembolsaron un monto record en la historia de California en una campaña para la aprobación de una ley: *más de 200 millones de dólares*. Invirtieron esa suma de dinero para asegurar sus ataques a los derechos de los trabajadores.

Se trató de una campaña muy agresiva, al grado de que al iniciar la aplicación los trabajadores eran obligados a ver videos en favor de la ley (es decir, no podían iniciar su trabajo sin verlos). Y todo bajo la mentira sobre cómo este estatus “independiente” beneficiaría a los conductores.

Pero hoy, a 5 años de la aprobación de la Proposición 22 y a 2 años de la sentencia de la Corte, la situación cambió. Lo que expresan los conductores, incluso quienes se habían dejado llevar inicialmente por la campaña de la empresa, es que la situación es mucho peor. A lo largo de los años, el avance de las empresas sobre los derechos de los trabajadores aumentó de forma brutal, con salarios y condiciones de trabajo cada vez peores. Asimismo, las promesas de la Prop 22 se encuentran (por supuesto) incumplidas.

La pelea por construir un sindicato

Sin embargo, ahora los trabajadores encontraron una manera de sortear esta traba-



Con la ley AB 1340, se habilita la posibilidad de formar un sindicato autorizado para la negociación colectiva sobre salarios, beneficios y condiciones de trabajo. La particularidad es que dicho sindicato engloba a todos los conductores por aplicación del estado de California; es decir, funcionaría como un sindicato por rama y podría agrupar en una sola organización a los 800.000 conductores por app de California.

Esta es una diferencia significativa, pues permitiría incorporar cientos de miles de trabajadores con una sola elección sindical. Al ser los conductores una categoría especial, que no tiene un lugar de trabajo fijo o trabajan para más de una empresa a la vez, la ley establece este mecanismo tomando todo el estado como un distrito único, y funcionando como un sindicato por rama a escala de todo California^[1].

Cabe recordar que el modelo sindical de EEUU presenta inmensas trabas para la organización: normalmente los sindicatos se forman por empresa, lo que significa que deben constituirse y aprobarse en cada lugar de trabajo individual, requiriendo en cada uno una elección separada.

Por ejemplo, la campaña de sindicalización de Starbucks muestra esta situación: aunque haya 2 cafeterías separadas por solo una cuadra, se requiere una elección específica para cada una de las tiendas de la empresa (que son más de 10.000). Esto hace la campaña de sindicalización muy difícil, pues de esta manera se incorporan al sindicato 10 o 15 trabajadores por cada elección.

Por supuesto, poner en pie un sindicato que represente a 800.000 conductores es un desafío inmenso. De acuerdo a la legislación, un sindicato que quiera representar a esos trabajadores debe conseguir, como mínimo, tarjetas de autorización del 30% de los mismos (más de 200.000 afiliados).

Para hacerle frente al desafío, los trabajadores lanzaron una de las campañas de sindicalización más importantes en todo EEUU, para conformar el California Gig Workers Union (CGWU) como representación legal de los conductores de la región.

Este sindicato funciona como el espacio de organización de los conductores de California desde hace 10 años. El CGWU organiza a los conductores por sus reclamos, batalló contra la Prop 22 y exige mejores condiciones de trabajo. Actualmente, impulsa esta enorme campaña para conquistar su reconocimiento legal y, de esta forma, representar a los conductores de todo el estado.

En el sector las condiciones son cada vez más duras. Los conductores denuncian el brutal saqueo de las empresas: en 10 años pasaron de recibir el 70% del costo del viaje a solo el 30%, una reducción que fue directamente a incrementar las ganancias empresarias. Para colmo, a ese mísero 30% hay que descontarle los costos de mantenimiento de los autos, combustible, etc. Eso resulta en que los trabajadores deben pasar cada vez más horas arriba de sus autos para poder llegar a fin de mes, con ingresos cada vez peores.

Esta realidad se suma a los bloqueos y desactivaciones de cuentas arbitrarias (despidos encubiertos de los que las empresas no se hacen cargo) y otros problemas en las condiciones de trabajo. Sumado a las promesas incumplidas de la Prop 22, hoy la situación es muy diferente entre los trabajadores y crece la perspectiva de organización sindical.

Las empresas, por su parte, apuestan a que, como los requisitos legales son tan grandes, los trabajadores nunca logren cumplirlos y formar su sindicato. Pero los primeros datos de la campaña de sindicalización son alentadores: son miles los que se suman a

formar su sindicato y que quieren organizarse para ponerle un freno a Uber, Lyft y las empresas por aplicación.

Se trata de una batalla contra empresas que son símbolo de la precarización laboral en el siglo XXI, con su modelo de trabajo por plataforma, desconociendo la relación laboral y buscando implementar condiciones de trabajo del siglo XIX a través del uso de las nuevas tecnologías. El trabajo por plataforma es punta de lanza de los intentos del capitalismo para avanzar contra los derechos de los trabajadores en todo el mundo.

Pero la respuesta y la organización por abajo son la contracara de este proceso. Esto se expresa en la lucha por la formación del California Gig Workers Union. Por supuesto, quedan varios pasos por delante. Aún debe aprobarse y promulgarse la ley AB 1340, aunque el panorama parece alentador en ese sentido. Posteriormente, hay que cumplir con todos los requisitos legales para formar oficialmente el sindicato y, de esta manera, presionar a las empresas para lograr un contrato que permita poner en el centro de la escena las necesidades de los trabajadores.

El California Gig Workers Union ya se está organizando para dar esa pelea. En ese proceso, será fundamental construir la fuerza y organización de los trabajadores, para involucrarlos profundamente en esta lucha contra empresas inmensas como Uber. Solo con la organización y el protagonismo de los propios conductores será posible lograr las conquistas de los trabajadores. Se trata de un proceso de gran importancia política en esta coyuntura: esta histórica campaña de sindicalización significa un contrapunto frente a las políticas de Trump, que busca atacar los sindicatos y los derechos laborales.

Este paso de los conductores de California también hace parte de un fenómeno internacional. A este proceso se suman importantes experiencias de lucha como la de los repartidores de Brasil, que son hoy el sector de la clase trabajadora más movilizada en ese país, la lucha del SiTraRepA en Argentina y las peleas de los conductores y repartidores por plataformas en todo el mundo.

Estas experiencias confluirán en el Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas, cuya segunda edición se realizará en abril de 2026 en Los Ángeles. Será un encuentro histórico, el cual se desarrollará en un momento decisivo de la campaña de sindicalización del CGWU y servirá para poner en pie de lucha y coordinación internacional todas estas experiencias de organización contra el capitalismo del siglo XXI.

^[1] Un sindicato por rama agrupa a todos los trabajadores de una actividad específica, independientemente de para qué empresa trabajan o dónde lo hagan.■

BRASIL | Elecciones a Sindicato de Estudiantes de la Universidad de San Pablo

Contra el inmovilismo, el electoralismo oportunista y el sectarismo

Hay que construir un movimiento estudiantil independiente del rectorado, de las burocracias y de los gobiernos para enfrentar el imperialismo de Trump, poner a Bolsonaro y a los golpistas en la cárcel y dar la vuelta a la USP.

Renato Assad

Socialismo ou Barbárie Brasil

Artículo de la Juventud Anticapitalista – ¡Ya Basta! de la Universidad de San Pablo aparecido en Esquerda Web. Luego de la redacción de este artículo, los compañeros conformaron un frente común independiente con la organización Faisca.

Las elecciones para el Sindicato de Estudiantes de la USP (DCE), la mayor organización estudiantil de América Latina, se celebrarán los días 9, 10 y 11 de septiembre. Se darán en un mundo marcado por la disrupción de múltiples y profundas crisis. También hay una nueva situación en Brasil. Nos enfrentamos, por un lado, a una renovada ofensiva del imperialismo estadounidense contra Brasil y América Latina; por otro, a un contraataque de los ultraderechistas partidarios de Bolsonaro, quienes siguen buscando facilitar un golpe de Estado.

Mientras tanto, la izquierda del orden (desde el Partido de los Trabajadores [PT] hasta el Partido Socialismo y Libertad [PSOL]) no ofrece ninguna resistencia significativa. Por el contrario, conscientes de las reservas y la voluntad de lucha presentes en amplios sectores de la clase trabajadora y los oprimidos, apuestan exclusivamente por la institucionalidad y las negociaciones con el Centrão, por la unidad con la burguesía vasalla del imperialismo, y relegan las tareas democráticas más básicas al Supremo Tribunal Federal.

Esta política de conciliación ha abierto cada vez más espacios para que la extrema derecha rehabilite su proyecto político y económico (con o sin Bolsonaro), al tiempo que sabotea conscientemente la organización y movilización de la clase trabajadora y la juventud en la confrontación con el imperialismo y la extrema derecha.

Es en ese marco que se realizan las elecciones DCE de la USP; elecciones que, escandalosamente, fueron organizadas casi en medio de las vacaciones sin ningún diálogo con la base estudiantil, algo inédito en la historia de la entidad y expresión clarísima de la burocracia de la actual gestión: ni siquiera los gobiernos del PT llegaron a algo como eso.

Sin embargo, el proceso electoral no puede reducirse a una contienda de candidaturas y aparatos, como hace la gestión actual: debe desempeñar un papel fundamental en la politización del movimiento estudiantil, su organización de base y su movilización. Debe combinar el debate de ideas, programas y métodos desde la base para revitalizar el movimiento estudiantil y afrontar los retos históricos que se avecinan, logrando así victorias políticas y sindicales en el próximo mandato.

La actual administración del DCE: un obstáculo activo a la lucha estudiantil

La actual gestión de la USP DCE, compuesta por Correnteza (UP), Juntos (MES/PSOL) y Juventude Sem Medo (PSOL), expresa mayor similitud que diferencias con lo que hay de más nocivo en el movimiento estudiantil: la inacción y el sabotaje a la autoorganización y a la democracia de base.

Presentándose como parte de la llamada “Oposición de Izquierda en la UNE”, la dirección del DCE repite, a escala de la USP, métodos burocráticos muy similares a los denunciados a nivel nacional sobre la dirección de la UNE (PT, PCdoB, Levante Popular, Rede y, más recientemente, Juventude Sem Medo). Aunque de forma distinta y con mínimas diferencias programáticas, la actual dirección del DCE es reveladora: transforma las asambleas en meros foros formales, carentes de movilización real, debate político dinámico y sin tomar medidas serias.

El ejemplo más flagrante fue la parálisis ante los ataques sistemáticos de la extrema derecha contra la USP: cuando los estudiantes propusieron la creación de un comité antifascista, la dirección del DCE no hizo ningún esfuerzo por implementarlo, prefiriendo centrarse en reuniones de gabinete con la burocracia universitaria en lugar de la movilización directa. Esta es una tarea que, por cierto, estamos llevando adelante e invitando a todos los sectores, colectivos y organizaciones a construir juntos.

Esta gestión opera en sentido contrario a sus palabras: hablan de unidad, pero basándose exclusivamente en cálculos elec-

torales; hablan de lucha, pero obstaculizan los procesos de movilización; hablan de democracia, pero reducen la organización estudiantil a rituales formales y vacíos. En los últimos años, sus acuerdos y reestructuraciones —incluyendo el movimiento Juventud Sin Miedo en las últimas elecciones, un movimiento que, según ellos, debe ser abordado— demuestran que el verdadero criterio no es la defensa inflexible de los intereses estudiantiles, sino el mantenimiento del aparato.

El resultado es un DCE que no logra organizar, movilizar ni enfrentar los ataques en toda su magnitud. De hecho, sigue sirviendo al propósito de debilitar la voluntad de lucha de los estudiantes de la USP mediante acciones rutinarias en un contexto extraordinario: promesas y reuniones con la burocracia universitaria se venden constantemente como “victorias” a la base, una orientación que no hace más que desarmar a los estudiantes para enfrentar el continuo ataque imperialista de Trump, la contraofensiva de la ultraderecha que busca legitimar su proyecto golpista, y las luchas económicas para acabar con la escala de 6x1, el marco fiscal, el impago de la deuda pública fraudulenta, etc.

Además, la actual política del DCE también es un obstáculo para las urgentes batallas que debemos librar dentro de nuestra Universidad por cuotas para personas trans y con discapacidad, exámenes de ingreso indígenas, retención estudiantil y vivienda para todos los estudiantes, el regreso del gatillo automático para la contratación de profesores, elecciones directas para el rectorado y paridad en los consejos, la eliminación de la Policía Militar de los campus, etc.

En otras palabras, en lugar de que el gobierno actual organice la resistencia contra el rector y los ultraderechistas Trump, Bolsonaro y Tarcísio, de intentar promover y alentar la politización y la movilización de sectores cada vez más amplios de estudiantes —en unidad con el personal y el profesorado— y de, en última instancia, estimular la vida política en nuestra Universidad, actúa como una válvula de escape, canalizando la indignación en gran medida hacia agitaciones meramente autoproclamatorias.

La contradicción del PSTU y un llamado oportunista

En esta polémica con los compañeros de Rebeldía (PSTU), es importante destacar un punto de partida esencial: podemos y debemos construir la más amplia unidad de acción en la lucha directa en defensa de las causas democráticas y sindicales, incluso con sectores reformistas, burocracias sindicales y, según las circunstancias, incluso con sectores democráticos de la clase dominante.

Sin embargo, esto no significa, bajo ninguna circunstancia, que la unidad de acción deba confundirse con la unidad política y programática con estos sectores. Esta fue la lección de Lenin y Trotsky en la lucha contra el oportunismo de la Segunda Internacional y contra el centrismo que, oscilando entre la revolución y la adaptación, siempre terminaba reforzando a las direcciones conciliadoras.

Es precisamente aquí donde se hace evidente la política contradictoria de Rebeldía en el movimiento estudiantil en su llamado “*Eleições do DCE da USP: por uma chapa unificada da Oposição de Esquerda*”. Mientras exigen la independencia de clase y la formación de una oposición de izquierda al lulismo, los compañeros parecen actuar exclusivamente con base en un cálculo estrictamente de aparato, que traslada mecánicamente lo que fue la última CONUNE a la realidad del USP DCE.

En la CONUNE, la disputa entre bloques nacionales impone una dinámica en la que la formación de la Oposición de Izquierda se presenta como una necesidad táctica, dado el peso abrumador de la mayoría gobernante. Sin embargo, la USP DCE es una entidad completamente diferente. No hay que replicar los bloques nacionales, sino de intervenir en los ciementos concretos de la Universidad, que en 2023 presenció una de las mayores huelgas estudiantiles de los últimos tiempos.

Esta huelga demostró claramente el papel de la actual dirección del DCE y fue muy bien descrita por los propios compañeros de Rebeldía: *La DCE simplemente desapareció. Hasta el día de hoy, no hemos tenido una asamblea general que apruebe el fin de la huelga, ni siquiera una explicación pública de esta postura.*



Proceder correctamente: “(...) *da la impresión de que la preocupación de la DCE es tener algún un saldo positivo para poder terminar el paro diciendo que, bajo su gestión de la entidad, eso se logró.* En otras palabras, parece que al DCE le preocupa su imagen, y no la lucha.” Por lo tanto, tanto para nosotros como para nuestros compañeros de Rebeldía, el resultado de la experiencia de la huelga fue claro: la fuerza residía en las organizaciones de base, en las asambleas, en los comités creados en cada curso y unidad que superaron políticamente las orientaciones centristas y oportunistas del DCE en ese momento.

Por lo tanto, apostar por la “unidad” con esta gestión no significa fortalecer el movimiento estudiantil ni avanzar hacia un plan político-sindical que reactive la fuerza colectiva de la movilización estudiantil. Simplemente significa reconstruir artificialmente la legitimidad de un liderazgo que, lamentablemente, ya ha demostrado su incapacidad y traición. Con esta jugada, Rebeldía pone de manifiesto una enorme contradicción con su propia tradición y pensamiento político, por mucho que intenten justificarlo todo mediante discusiones “tácticas”.

Ahora bien, ¿cómo pueden explicar sus años de ausencia de la CONUNE y la construcción de su propio foro estudiantil (una táctica que finalmente fracasó debido a una hegemonía política crónica de camaradas burocráticos) para pasar a una posición de capitulación abierta ante el centrismo que tanto han criticado en los últimos años? ¿Se trata de una reformulación táctica, programática y estratégica? Creemos que no... Sobre todo porque, recientemente, los camaradas han mantenido importantes discusiones para diferenciarse de todas las organizaciones que conforman la actual administración del DCE —incluida la UJC, que abandonó el barco cuando el DCE abandonó la huelga de 2023—, lo que solo pone de relieve una enorme desconexión entre la retórica de la independencia de clase y la práctica concreta del acuerdo, demostrando que sin una verdadera batalla para superar el centrismo, la conciliación y sus formas burocráticas, no hay forma de reconstruir una alternativa estudiantil verdaderamente combativa arraigada en la movilización de base.

También vale la pena recordar que el año pasado, en el Congreso Estudiantil de

Letras, aprobamos y votamos juntos, incluyendo a los compañeros de Faísca (MRT), una importante resolución tras un largo debate plenario: que el programa de Letras sería el de una oposición de izquierda a la administración del DCE. Sin embargo, parece que esta resolución ahora está siendo ignorada, lo que es un error político.

Realizamos en este debate franco y honesto con los camaradas, por duro que parezca, porque estamos convencidos de que Rebeldía, en unidad con la izquierda independiente, podría desempeñar un papel importante en lo que hemos llamado la “refundación del movimiento estudiantil”. Nuestra agitación busca establecer un sistema de (re)construcción del movimiento que rescate lo mejor de nuestra tradición (sin prescripciones dogmáticas) combinado con nuevas formas de organización que permitan al movimiento reposicionarse como protagonista de la lucha de clases del país. Para ello, existen una serie de lecciones tácticas y estratégicas que contribuyen a impulsar tal esfuerzo, pero entre ellas no hay atajo que acorte el camino y nos “haga la vida más fácil”.

El sectarismo no es un antídoto contra el oportunismo centrista

Debatamos ahora con los compañeros de Faísca (MRT). El punto central de este debate es una evaluación de la situación política actual del país: el ataque imperialista de Trump y la continua contraofensiva de la ultraderecha para reabrir las posibilidades de un golpe de Estado.

Si es cierto que la política de intento de normalización del régimen por parte del lulismo y su frente amplio (ahora fragmentado) es una utopía reaccionaria y abre camino al fortalecimiento de la extrema derecha, también es cierto que iniciar la evaluación política de la situación actual desde el gobierno Lula-Alckmin conduce a un ultraizquierdismo que, por el vértice opuesto del oportunismo derrotista, acaba resultando en una política igualmente rutinaria y, por tanto, estéril.

Ambas variantes del impresionismo, derrotista o simplista, convergen finalmente en el mismo punto de llegada. Ya sea por sobreestimación (derrotista) o subestimación (simplista) de la extrema derecha, ninguna puede contribuir consistentemente a las tareas que plantea la realidad:

sin duda, bajo cualquier circunstancia, serán una desviación de las políticas y acciones concretas que exigen las diferentes circunstancias de la lucha de clases.

La consolidación de una alianza entre una extrema derecha genocida y golpista y el imperialismo estadounidense, que demuestra cada vez más su disposición a reinstaurar el proyecto golpista en nuestro país al servicio de los intereses económicos estadounidenses, no es algo habitual. Trump está convirtiendo a Brasil —y lo hace únicamente porque cuenta con uno de sus mayores aliados políticos en el planeta— en un laboratorio para su proyecto bonapartista de restaurar la hegemonía estadounidense.

Por lo tanto, llevamos mucho tiempo discutiendo con los compañeros sobre la postura, que consideramos sumamente errónea e inconsecuente, de no apoyar la agitación por el arresto de Bolsonaro y todos los golpistas. Ni siquiera de forma no orgánica, como lo hace el PSTU, los compañeros plantean esta demanda; parecen creer, entendemos, que el eventual arresto de Bolsonaro, incluso sin las masas en las calles, sería un acto regresivo en la situación actual.

En realidad, lo que hacen es subordinar todas las reivindicaciones políticas y democráticas a las económicas. Y aquí afirmamos categóricamente: tal enfoque es completamente ajeno a la tradición del marxismo revolucionario y nos conduce a una rutina propagandística incapaz de interferir concretamente en el curso político de la lucha de clases, que hoy se combina en una combinación dialéctica de peligros extremos y posibilidades históricas.

Esta rutina resulta en una fórmula política economicista, lo cual no solo constituye un error táctico, sino también una distorsión estratégica que, en nuestra opinión, se distancia del marxismo revolucionario. Lenin siempre enfatizó que la lucha económica debe estar ligada a la lucha política, y que las reivindicaciones democráticas (contra la opresión nacional, contra el autoritarismo estatal, por la libertad de organización y expresión) son instrumentos fundamentales para que el proletariado asuma una posición hegemónica.

Al reducir la política a la dimensión económica, los camaradas abandonan la perspectiva leninista y terminan cediendo terreno al reformismo y al liberalismo,

que monopolizan las causas democráticas, canalizando la revuelta popular hacia las instituciones burguesas. En otras palabras, terminan colocándose en una posición contra la que, paradójicamente, dicen luchar...

Un movimiento estudiantil de pie

Ante este escenario, estudiantes y jóvenes no pueden aceptar la inacción de la actual administración del DCE, ni su oportunismo electoral ni el sectarismo económico estéril y propagandístico que sacrifica la lucha democrática en aras del economicismo. El movimiento estudiantil de la USP necesita ser refundado sobre bases sólidas de independencia política, autoorganización popular y democracia real, para que sea capaz de enfrentar tanto a la reaccionaria burocracia universitaria como a los ataques coordinados del imperialismo de Trump y la ultraderecha bolsonarista. Esta es la única manera de poner al DCE de nuevo al servicio de las luchas concretas de nuestra Universidad y nuestra clase.

Esta tarea nos exige superar tanto las ilusiones de soluciones conciliadoras que ofrece la izquierda del orden —sin abandonar la táctica de la unidad de acción— como los atajos tácticos que buscan rehabilitar a direcciones probadas y fracasadas. Es necesario consolidar un frente no solo electoral, sino también arraigado en la lucha cotidiana, basado en un programa de medidas anticapitalistas que ponga como tarea de primer orden la pelea por la detención de Bolsonaro y los golpistas, la confrontación con el imperialismo y la movilización continua por reivindicaciones democráticas, sindicales y sociales dentro y fuera de la USP.

Por lo tanto, llamamos a la unidad de acción de todos los sectores del movimiento estudiantil y a la unidad política de todos los socialistas revolucionarios que se niegan a someterse a la lógica del orden y la conciliación. Llamamos a un frente consecuente y combativo que aspire no solo a resistir, sino también a transformar la USP por completo y, al hacerlo, aporte a un nuevo ascenso en el movimiento estudiantil, que encienda la llama de una alternativa anticapitalista capaz de desafiar la hegemonía de la burguesía y allanar el camino hacia victorias concretas para los explotados y oprimidos.■

Trump despliega buques en el Caribe, comete actos de terrorismo de Estado y amenaza a Venezuela

Ante las amenazas militares de la Casa Blanca, nos colocamos del lado del pueblo venezolano en la defensa de su soberanía nacional. Esto lo hacemos sin brindar ningún apoyo político al gobierno autoritario y burgués de Maduro, al mismo tiempo que denunciamos a la oposición burguesa pro-imperialista que apoyan una posible intervención militar estadounidense. Asimismo, repudiamos los actos de terrorismo de Estado de Trump, que bombardeó una lancha y asesinó a once de sus tripulantes, a los cuales acusó de ser "narcoterroristas".

Sthefany Zúñiga

Nuevo Partido Socialista - Costa Rica

Este martes (2), el presidente norteamericano anunció que el ejército estadounidense abatió una lancha donde viajaban once supuestos "narcoterroristas" en aguas internacionales del mar Caribe. Según la versión que ofreció en la conferencia de prensa, la nave supuestamente partió de Venezuela con un cargamento de drogas en dirección para los Estados Unidos.

Lo anterior constituye un acto de *terrorismo de Estado*, que se asemeja al accionar de Netanyahu en Medio Oriente. Sin ofrecer ningún tipo de prueba que confirme sus versiones, Trump se arroga el derecho de bombardear a quien quiera.

Bajo ninguna circunstancia se justifica que las fuerzas armadas estadounidenses ataquen una lancha y asesinen impunemente a once personas. En caso de que efectivamente se tratara de una embarcación con drogas, pudieron haberlos detenido y procesado judicialmente.

Por el contrario, Trump optó por hacer una demostración de su poderío militar y, de paso, erguirse como un "juez" con mandato sobre la vida de sus "vasallos" en la región que considera su patio trasero.

En sus redes sociales, el mandatario indicó que "el ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque terminó en la muerte de 11 terroristas en combate. Y ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!".

Esta acción terrorista es parte de la "guerra contra las drogas" de la administración estadounidense, la cual hace unas semanas experimentó un salto en calidad con el despliegue militar que ordenó la Casa Blanca en el mar Caribe.

El control territorial trumpista y la nueva guerra contra las drogas

El pasado 8 de agosto, el *New York Times* publicó un reportaje sobre una directriz secreta, emitida por Trump y dirigida al Pentágono, para "combatir" a los cárteles de drogas a través del despliegue de militares estadounidenses en el Caribe, amenazando a países como Venezuela y México.



Este despliegue constituye una bravuconada imperialista, que recuerda la lógica de la Casa Blanca de ver a Latinoamérica como su patio trasero. Este rasgo se acentuó particularmente en la segunda administración de Trump; por ejemplo, meses atrás amenazó con retomar por la fuerza el Canal de Panamá para detener el avance económico de China en la región.

En esta ocasión, el presidente estadounidense intenta aprovechar la desacreditación del gobierno de Maduro y su régimen autoritario para imponer sus intereses.

Como parte de las acciones, el gobierno estadounidense duplicó a \$50 millones de dólares la recompensa que ofrece por información que permita capturar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, bajo la acusación de mantener vínculos con los cárteles de Los Soles, el Tren de Aragua y de Sinaloa. Este es el mayor monto ofrecido por el gobierno estadounidense para una recompensa, el cual duplica lo ofrecido en su momento por la captura de Osama Bin Laden, ex-dirigente de Al-Qaeda.

Según el gobierno estadounidense, a Nicolás Maduro le confiscaron más de \$700 millones en activos como aviones, viviendas, joyas y dinero. Sumado a eso, la DEA (Administración para el Control de Drogas) asegura que incautó unas 30 toneladas de cocaína vinculadas al presidente venezolano.

Este despliegue militar y la cruzada particular contra Maduro, ocurre luego de que en febrero la administración estadounidense declarara como organizaciones terroristas extranjeras a los grupos criminales de México, Venezuela y El Salvador.

A las intimidaciones contra Maduro, se le suma la *presión hacia el gobierno mexicano de Sheinbaum*, mediante la amenaza de subir las tarifas arancelarias. Además, en lo que llevamos del año, México entregó a la justicia

estadounidense a 55 líderes del narcotráfico, se desplegaron tropas de la Guardia Nacional mexicana en la frontera norte y Estados Unidos intensificó los vuelos secretos de drones sobre territorio mexicano para rastrear laboratorios de producción de fentanilo.

Junto con esto, el accionar de Trump rememora lo que hicieron los gobiernos de Nixon y Reagan en las décadas del 70 y 80. Ambos ex presidentes impulsaron la "guerra contra las drogas" que, a nivel internacional, implicó una mayor intromisión estadounidense en varios países de la región, como México o Colombia; una estrategia que no resolvió el problema del narcotráfico y, por el contrario, aumentó la violencia de los cárteles a nivel regional.

El despliegue en el Caribe: el "hard power" del imperialismo sobre la región latinoamericana

La geopolítica del trumpismo refleja un retorno a la lógica de la territorialización imperialista con áreas de influencia, la cual se contraponen al consenso neoliberal del libre comercio sin restricciones y desterritorializado. Es decir, implica el retorno del Estado y del imperio de la política sobre la economía. Es una táctica ofensiva de un imperialismo en retroceso, con la cual busca un reordenamiento político, geopolítico y económico (ver *La guerra comercial y la disputa por la hegemonía imperialista*).

Esta provocación imperialista de Trump para controlar el Caribe como su zona de influencia, son una expresión más de la geopolítica del trumpismo. El imperialismo estadounidense no realiza un despliegue militar de tales magnitudes desde la invasión a Panamá en 1989. En aquel momento, se desplegaron más de 26 mil soldados y se bombar-

dearon centros poblacionales y bases militares en Panamá, con la finalidad de deponer al dictador Manuel Antonio Noriega.

Para esta ocasión, además, la operación está bajo la dirección del Comando Sur e implica el despliegue del siguiente *arsenal de alta tecnología*:

1. El buque anfibio *USS San Antonio*, que transporta a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines con 4.000 efectivos entrenados en maniobras acuáticas, aéreas y terrestres.

2. El buque de asalto anfibio *USS Iwo Jima*, considerado un portaaviones en miniatura.

3. Tres buques destructores: *USS Gravelly*, *USS Jason* y *USS Sampson*, con un sistema *Aegis* de radares de alta potencia para búsqueda, seguimiento y guiado de misiles con capacidad para rastrear más de 100 objetivos.

4. Aviones *Poseidón P-8* con sensores de alta tecnología y con capacidad para lanzar torpedos y misiles antisubmarinos.

5. Un *submarino nuclear* que puede permanecer sumergido durante meses.

Todo este despliegue demuestra la forma en que Trump utiliza el "hard power" para hacer valer los intereses del imperialismo estadounidense en la región.

En respuesta a las amenazas militares que ordenó la Casa Blanca, el gobierno venezolano llamó a los 4 millones de *efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana*, creada por el gobierno de Hugo Chávez en 2007, como parte de la reforma a las fuerzas armadas. Bajo la administración de Maduro esta milicia tuvo un fuerte crecimiento, formando parte de la estructura política del Estado y del partido de gobierno, y tiene entre sus funciones actuar contra una agresión extranjera y contra la oposición interna.

Tal como se señaló en una *nota anterior*, el régimen chavista se encuentra muy deslegitimado, pues pasó de ser un nacionalismo burgués que otorgó ciertas reformas y que gobernaba apoyándose en los mecanismos plebiscitarios, a degradarse hasta transformarse en un régimen autoritario que sumió al país en una profunda crisis social.

Repudiamos el despliegue militar y las amenazas del imperialismo estadounidense contra Venezuela. Nos colocamos del lado del pueblo venezolano en la defensa de su soberanía nacional y el derecho a autodeterminarse. Esto lo hacemos sin brindar ningún apoyo político al gobierno autoritario y burgués de Maduro, al mismo tiempo que denunciamos a la oposición burguesa pro-imperialista que apoyan una posible intervención militar estadounidense.■

CUMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN DE SHANGHAI EN CHINA |

Entre el trumpismo y el “contra-consenso” de Beijing

Agustín Sena
Izquierda Web

Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre comenzó la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad china de Tianjin. Asistieron representantes de 26 Estados entre países miembros (*China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, Uzbekistán, India, Pakistán, Irán y Bielorrusia*) y “socios de diálogo” como *Turquía, Arabia Saudí, Egipto, Indonesia o Myanmar*. Participaron como invitados diplomáticos el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres y el de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Kao Kim Hourn. La OCS surgió a comienzos de los años 2000 como una organización multilateral de menor envergadura y dominada por China, principalmente con fines de seguridad. La reciente cumbre de Tianjin muestra el intento de Xi Jinping de transformarla en algo más que un mero foro de seguridad. Beijing buscó crear un polo diplomático y geopolítico alrededor de la cumbre.

La representación del evento, aún excepcional y no exenta de precariedad en determinadas relaciones internas, no es nada despreciable en cuanto a proporciones. Los países miembros de la OCS representan el 43% de la población mundial. La porción del PBI mundial llega al menos al 23%, aunque estos son los cálculos más conservadores. En cuanto a la *calidad*, basta señalar que la cumbre reunió a dos potencias evidentes (China y Rusia), una enorme economía con ínfulas autonómicas (India), una potencia regional (Turquía) y varios productores energéticos de peso estratégico como Arabia Saudita e Irán.

Y no está de más señalar (en estos tiempos de retorno al belicismo) que 4 de los 9 países poseedores de armas nucleares estuvieron representados en la cumbre (Rusia, China, India, Pakistán). La delegación del quinto (Corea del Norte) llegó apenas acabada la cumbre a Beijing. Kim Jong-Un participó junto a Putin y la delegación iraní del desfile de Xi Jinping por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Sino-Japonesa.

Este desfile coronó lo realizado en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. La demostración militar (poco habitual en el gigante asiático) busca escenificar la intención china de pisar fuerte en todos los terrenos con la asistencia de los *aliados* más cercanos.

¿El bloque eurasiático?

La cumbre de Tianjin fue una demostración de vocación de poder geopolítico por parte de las potencias organizadoras. Es cierto que no se puede hablar (aún) de tal cosa como un *bloque* definido y consolidado. No existe el hoy profetizado *bloque eurasiático* por la sencilla razón de que entre los países convocados por la Organización de Cooperación de Shanghái existen choques internos y rispideces mutuas. El caso de la India es tal vez el más problemático o menos definido.

Pero es innegable que China está dando pasos concretos y acelerados para traducir finalmente su peso sobre la economía global en la constitución de un centro de gravitación geopolítica definido. La amalgama que juntó a los 26 Estados en Tianjin es evidentemente China.

Xi consiguió mantener, tras años de guerra en Ucrania, una alianza sostenida con Putin.

Al día de hoy, Putin (sin dejar de tener un alto grado de autonomía internacional) reposa en gran medida sobre China para sostenerse a flote y para que su economía no entre definitivamente en recesión. Es también China quien logra *arrastrar* a India, con quien hasta hace poco mantenía conflictos por la disputa abierta en frontera mutua en el Himalaya. Es China quien logra reunir a la propia India y a Pakistán (que vienen de bombardearse mutuamente hace pocos meses) en un mismo evento.

Esto no significa que China haya sometido al resto de los Estados asistentes a sus designios. Entre los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y los invitados a Tianjin hay Estados de muy diversas características, peso geopolítico y proporciones económicas. Desde potencias en construcción como Rusia hasta aliados *satélite* de dichas potencias e incluso países periféricos con destino de depredación. Pero lo cierto es que la lista de naciones destinadas a engrosar este último grupo está en plena expansión.

Es el caso de Mongolia, extenso país rural – minero con recursos que tanto China como Rusia tienen interés en explotar. El día que finalizó la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, Putin y Xi Jinping se reunieron con el presidente mongol, Ukhnaagiin Khurelsukh, para formalizar la ampliación del gasoducto *Fuerza de Siberia II*. Esta vía provee gas ruso a China a través de territorio mongol. El acuerdo es ampliar la capacidad de transporte hasta alcanzar una capacidad cercana a los 50.000 millones de metros cúbicos anuales.

El movimiento expuesto por la Cumbre de Tianjin fue doble. Por un lado, hay un acercamiento entre potencias y potencias en construcción de distinta envergadura en la búsqueda de acuerdos o consensos comunes. En este plano la escenificación del eje Moscú – Pekín se intensifica (como viene sucediendo desde la invasión a Ucrania). Y se suma un alto componente de expectativa con la aparición de India, una enorme economía que presenta fuertes desigualdades pero un potencial productivo inmenso.

Al mismo tiempo, se trasluce el arrastre que estas potencias y proto-potencias ejercen sobre los países periféricos que les quedan subsumidos, a veces con un componente claramente territorial. El caso mongol es un claro ejemplo en términos económico – territoriales. Pero también salta a la vista el caso de Bielorrusia que, en términos geopolíticos, opera casi como un proxy de Putin. Parte de la construcción de los nuevos imperialismos (como el ruso y el chino) es su búsqueda por establecer y ampliar su propia *hinterland*, su “espacio vital” o, en términos más concretos, su porción del globo pasible de ser expoliada.

El consenso globalizador de Beijing versus la discrecionalidad trumpista

Lo que cabe problematizar es cuál es la razón por la cual este conglomerado de países (que ocupa un trozo de plataforma continental descomunal, casi la mitad de la población del planeta y una cuarta parte del PBI mundial) llegó a reunirse bajo la dirección de China y el ladeo de Putin. La respuesta obvia sería el indiscutiblemente enorme peso de China en la economía global, que le marca un destino de competencia imperialista innegable frente a Estados Unidos.

Pero la razón más inmediata y directa es el accionar de Donald Trump. La *carnicería* de

aranceles de Trump está sacudiendo la *economía global*. Y las últimas imposiciones muestran que el problema no ha hecho más que comenzar. Hace pocos días Trump anunció un gravamen del 50% a las importaciones provenientes de la India. Es el gravamen más alto impuesto por Estados Unidos a nivel mundial, solo igualado por el que cayó sobre Brasil para auxiliar a Bolsonaro.

Trump justificó el *arancelazo* contra la India por sus compras sostenidas de gas ruso. Un gravamen de esta envergadura amenaza la competitividad india en comparación a otros exportadores como Vietnam y pone en riesgo una enorme porción de mercancías que salen habitualmente con destino a EEUU. El año pasado la India exportó productos a EEUU por un valor de 86.510 millones de dólares, casi el 20% de la exportaciones indias. “El comercio de bienes entre los dos países *sumó* 129.000 millones de dólares en 2024, con un déficit comercial estadounidense de 45.800 millones, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos”.

¿Qué consiguió Trump con esto? Lanzar a India en brazos de China (y Rusia). El premier indio Narendra Modi cerró un período de varios años de enfriamiento con Xi Jinping. Hace 7 años que no pisaba suelo chino. En 2020 había habido incluso choques militares en la frontera indio – china. Todo esto quedó atrás gracias a la *diplomacia arancelaria* de Trump.

Xi Jinping vio una clara oportunidad de explotar políticamente el caos económico y geopolítico impuesto por la discrecionalidad trumpista. Xi Jinping dijo en su discurso de apertura que buscará “*un mundo multipolar ordenado*”, protegiendo “*el libre mercado y un sistema global de gobernanza más justo y razonable*”. Trump logró invertir los signos en la escena geopolítica: convirtió a China, hasta hace poco el gran cuco del intervencionismo estatal, en el primer paladín del libre mercado a nivel internacional.

El imperialismo yanqui venía perdiendo competitividad sostenidamente ante la aparentemente interminable expansión de la economía china. En el momento que el *libre mercado* dejó de garantizar ventaja para EEUU, Trump archivó esa moda neoliberal para abrir paso a la política arancelaria agresiva. Tiene bastante sentido que China haga hincapié en la libre concurrencia mercantil como *alternativa* a la discrecionalidad caótica que Trump le propone al mundo. “[*La cumbre de Tianjin fue*] una hazaña que demuestra ‘otra globalización’ posible, cuyo pivote intenta ser Pekín pero, además, deja al descubierto los estragos políticos que provocan las políticas decididas por la actual administración norteamericana” (*La Nación*).

Multilateralismo, guerra y capitalismo de Estado en tiempos de caos global

En la orientación china no hay (en principio) un gramo de ideología. Xi Jinping no defiende el libre mercado por amor a la *multilateralidad*. Sino porque este mecanismo le reporta muchas mayores ventajas que los que Trump está poniendo a operar.

Las fórmulas que parecen defender el *viejo orden* neoliberal y globalizado son la carta de presentación del proyecto imperialista chino, todavía en construcción. Xi defiende la *libertad de mercado* como lo hicieron todas las potencias mercantiles en su período

de ascenso, cuando las fronteras abiertas les abren continuamente nuevos mercados para sus productos baratos.

Lo que resulta quizá original es que estas potencias *eurasiáticas* como China y Rusia son formaciones capitalistas de Estado. El neoliberalismo yanqui se pasó dos décadas condenando los rasgos “autoritarios” o intervencionistas de dichas formaciones por su choque con el libre mercado. Pero las particularidades del desarrollo chino (la restauración del capitalismo a la *china* seguida de años de crecimiento exponencial) le permitieron usufructuar las ventajas de planificación económica de dicha formación para convertirse en una potencia manufacturera y (cada vez en mayor medida) geopolítica.

Tanto fue así que el imperialismo yanqui (o un ala del mismo, la que dirige Trump) decidió intervenir y perturbar el *libre mercado* para intentar refrenar el imparable crecimiento chino. La cumbre de Tianjin marca un hito con quizá pocos antecedentes en cuanto a la iniciativa diplomático – geopolítica de la clase dirigente china (la burocracia burguesa del PCCh).

No se trata de ninguna manera de la instauración de un “orden alternativo” encabezado por una “potencia benévola”. Así quisieran creerlo muchos voceros de la mistificación, el oportunismo y el conformismo político, que buscan en China una potencia alternativa ante la cual inclinarse. No se ha inventado tal cosa como el *imperialismo benévolo*. Sucede que para China hoy parece ser más ventajosa la vía económica que la extraeconómica, a la inversa que a Trump y los Estados Unidos.

Lo cual tampoco significa que el imperialismo en construcción chino sea “meramente económico” (ningún imperialismo lo es). Si Xi Jinping está poniendo sobre la mesa la cuestión de cómo ampliar la influencia china más allá de lo meramente económico (las escenificaciones militares tienen una razón de ser, lo mismo que los “ejercicios” militares que zumban alrededor de Taiwán), el *imperialismo interno* chino ha demostrado ya sus aristas *extra económicas*. Por ejemplo, en la persecución contra minorías étnicas como los uigures.

Ejemplos similares pueden tomarse del territorio de la Federación Rusa. La similitud remite a la existencia de esa *hinterland interna* que China aprovechó para motorizar su industrialización y crecimiento meteórico. Pero para convertirse en una potencia internacional en regla China necesita ampliar su influencia fuera de sus propias fronteras.

Ahí entra el plan de creación de un Banco de Desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái, anunciado en la declaración final de la cumbre. “Xi [Jinping] *prometió* 1.400 millones de dólares en préstamos en los próximos tres años para los miembros de la OCS”.

Y la iniciativa china le da aire al resto de los actores díscolos ante EEUU. Putin aprovechó la cumbre de Tianjin para aclarar tácitamente que no aceptará “garantías de seguridad occidentales para Kiev” en caso de un eventual acuerdo de Paz con Ucrania, como lo había afirmado el negociador de Trump, Steve Witkoff. También India toma algo de aire luego del brutal *arancelazo* trumpista, que atentaba contra su status comercial y exportador.

En todo caso, el intento de poner en pie nuevas alianzas o un virtual *bloque eurasiático* marca el intento chino de avanzar en más esferas, no sólo en la estrictamente económica o comercial. ■

DE REGRESO A OCTUBRE

FESTIVAL
DE ROCK

VIERNES
19/9
19 HS



**LANZAMIENTO
DE CAMPAÑA DE**
Facultad de Filosofía y Letras
Puán 480

**MANUELA
CASTAÑEIRA**

¡Ya Basta! nuevo **mas**

LA IZQUIERDA ANTICAPITALISTA

Las Rojas ARTE INSURRECCION Tinta Roja JTP TRABAJADORES PRECARIZADOS

SEGUINOS EN REDES @MANUELACASTANEIRA

